Universidad Martín Lutero



Carrera de Derecho

Optar al título de Licenciado en Derecho

Efectiva aplicación de las Técnicas de Litigación Oral y la Atención Integral Especializada de la Víctima de Violencia de Género en el Juzgado Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Género por Ministerio de Ley de Nueva Segovia.

Autor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Año 2019

Carta Aval

TABLA DE CONTENIDO

[I. Resumen 5](#_Toc57130093)

[II. Introducción 7](#_Toc57130094)

[III. Justificación 8](#_Toc57130095)

[IV. Antecedentes 14](#_Toc57130096)

[V. Planteamiento del problema. 20](#_Toc57130097)

[VI. Objetivos 21](#_Toc57130098)

[a. Objetivo General 21](#_Toc57130099)

[b. Objetivos específicos 21](#_Toc57130100)

[VII. Preguntas Directrices. 21](#_Toc57130101)

[VIII. Marco Teórico 21](#_Toc57130102)

[IX. Diseño Metodológico 18](#_Toc57130103)

[X. Operacionalizacion de las Variables 26](#_Toc57130104)

[XI. Descripción de los resultados 27](#_Toc57130105)

[a. En Cuanto al Objetivo General 27](#_Toc57130106)

[b. En Cuanto a los Objetivos específicos 28](#_Toc57130107)

[XII. Análisis y triangulación de resultados 31](#_Toc57130108)

[XIII. Conclusiones 32](#_Toc57130109)

[XIV. RECOMENDACIONES. 35](#_Toc57130110)

[XV. ANEXOS 37](#_Toc57130111)

[Anexo 1 Resumen de Encuesta a Juez / Defensor / Ministerio Publico 37](#_Toc57130112)

[Anexo 2 Resumen de Encuesta a víctima de violencia 43](#_Toc57130113)

[Anexo 3 Operacionalización de las Variables. 45](#_Toc57130114)

[XVI. Bibliografía 46](#_Toc57130115)

# Resumen

Esta investigación se desarrolló de forma: conceptuales, legales y estructurales de la ruta de protección a la víctima, conceptos puntuales de violencia, origen y el por qué se da hoy en día la no denuncia, los patrones de violencia y el proceso progresivo de la misma, es de fundamental importancia estos conocimientos para entender el contexto de la investigación.

La víctima desde sus antecedentes, dentro del derecho y las primeras manifestaciones de protección, así como los derechos contenidos en los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales.

El modelo integral de atención a la víctima, es la información existente desde la creación del modelo y los entes involucrados en el funcionamiento del mismo.

Detalla las técnicas de litigación oral, como herramienta efectiva para la ejecución en defensa de las victimas procesadas.

Estas investigaciones tienen como objetivo “Evaluar la Técnicas de Litigación Oral en el Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Género por Ministerio de Ley del departamento de Nueva Segovia. Mediante la Metodología del uso de la técnica de litigación Oral.

Esta investigación verificará el actuar de cada órgano involucrado en el cumplimiento del modelo de atención integral (MAI) implementado para la atención integral especializada a víctimas y describirá el acompañamiento a la víctima una vez finalizado el proceso Judicial en el juzgado de Distrito Penal de audiencia y violencia de género.

Se espera que la Técnicas de Litigación Oral en el Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Género por Ministerio de Ley del departamento de Nueva Segovia, sea un mecanismo eficiente en brindarles a las mujeres victima.

# Introducción

El Estado Nicaragüense ha realizado esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género, con el propósito de proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir libre de violencia.

La voluntad política expresa la concertación de voluntades, capacidades, funciones y acciones de las instituciones públicas del sector justicia y salud donde se toma como referencia el marco jurídico del derecho internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, la legislación Ley No. 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641, “Código Penal” y su reglamento, Decreto No. 42/2014 y 43/2014. Protocolo de Interpretación de la Ley de prevención y atención en violencia de género en Nicaragua tomado de https://www.poderjudicial.gob.ni/genero/pdf/publicaciones\_recursos\_int/PROTOCOLO\_PREVENCION\_VIOLENCIA\_PJ.pdf.

Este trabajo articulado y coordinado entre las instituciones responsables del acceso a la justicia: la Corte Suprema de Justicia – CSJ, el Instituto de Medicina Legal – IML, Policía Nacional – PN a través de las Comisaría de la Mujer y de la Niñez – CMN, el Ministerio Público (MP) es reflejo del consenso de la Comisión Interinstitucional para mejorar la atención, protección de las mujeres víctimas de violencia de género

Algunos de estos esfuerzos son la propuesta de “Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua” – MAI, basado en un nuevo procedimiento para el abordaje de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, a partir de los convenios, convenciones y tratados internacionales, la aplicación de éstos en la legislación nacional y la disponibilidad de los recursos para su implementación.

La política de estado de prevención de violencia, establece una estrategia comunitaria de implementación, sustenta en el modelo preventivo comunitario; se cita la ley en el ámbito de implementación del Modelo de Atención Integral “Ley 779”.

Esta investigación tiene como finalidad conocer el efectivo cumplimiento de las técnicas de litigación oral, propiciando el respeto a derechos universales que se merecen específicamente las víctimas. Yelena 2018, “La práctica de estas técnicas es un ejercicio estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende, en donde cada parte busca explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos”

El ambiente de esta investigación se realiza mediante la observación de los procesos de litigación, tiene que ver con la forma de realizar los argumentos y pretensiones al dirigirse al Juez, utilizando la técnica de Litigación Oral, de esta manera los argumentos presentados, motivando al juez a realizar un veredicto. Sea este apegado a los argumentos presentados como verdaderos y basados en la presentación de la evidencia mostrada por la defensa.

La Aplicación de la Técnica de Litigación Oral, propiciando el respeto al derecho universal a las víctimas de violencia de género se realizará en el Complejo Judicial Departamental, Ocotal, Nueva Segovia, 2019

La información de esta investigación se basa en entrevistas a: Juez, Fiscal (Ministerio Público de Nueva Segovia), Acusador Particular y Defensor Público.

Este documento contiene las directrices para lograr una argumentación jurídica con perspectiva de género para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

Contiene los siguientes aspectos: Marco teórico de la violencia de género, legislación nacional y marco jurídico internacional, regional y resoluciones de las Comisiones de Naciones Unidas que complementa los tratados relacionados con la protección de derecho humanos de las mujeres, así como las reglas generales de actuación e interpretación desde la perspectiva de derechos humanos y de género, Yelena 2019.

# Justificación

Belén do Pará 2015, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en su género, “que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico” , Ley 799, Art. 7. Derechos protegidos de las mujeres, “Todas las mujeres tienen derecho tanto en el ámbito público como en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su libertad e integridad sexual y reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional e Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos”.

En su preámbulo la Convención reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación se entiende "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (... ) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". La Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3), Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979.

Reconoce en este fenómeno "una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", y el hecho de que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, raza, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión...".

Pretende, a través de su normativa, proporcionar una protección adecuada a las violaciones contempladas en la definición. Para esto la Convención no se fundamenta en la tradicional neutralidad de género inherente a las leyes, pues está claro que busca precisar medidas adecuadas por parte de los Estados (Arroyo, 2001.

Según la Convención, la violencia es un factor que impide el pleno disfrute tanto de los derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 5, así como de los derechos Civiles y Políticos, algunos de los cuales, se mencionan en el artículo 4, principalmente "el derecho a la vida" y el del "respeto de la integridad física, psíquica y moral".

Art. 7. Derechos protegidos de las mujeres “Todas las mujeres tienen derecho tanto en el ámbito público como en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su libertad e integridad sexual y reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional e Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos.". LEY No . 779, “LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No . 641, “CÓDIGO PENAL

La Convención amplia la obligación de los Estados, entre estas se encuentra la formulación de leyes que vayan dirigidas a la eliminación de la violencia simbólica

y material que hace parte de la cultura y la reproduce en las sociedades, en esta línea el impacto del análisis de género debe incluir los fundamentos de la Convención que garanticen el derecho a vivir una vida libre de violencia a las mujeres, en las formulaciones de las leyes.

Para su mejor comprensión separamos aquí los contenidos según sus aspectos fundamentales:

***a) Los agresores:***

Son los posibles provocadores en los espacios en que se puede perpetrar la violencia. Indica que esta violencia puede ser física, sexual y psicológica y puede ocurrir cuando el acto "sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra" (Adaptado del NUDH C – 1981, Arto 2).

NUDH C – 1981, Arto 2, al referirse al agresor y su actuación, no sólo ubica a la "comunidad" como lugar donde éste puede actuar, sino que amplía el ámbito a la familia o unidad doméstica o a cualquier otra relación interpersonal, ya sea que comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima.

Así mismo señala la necesidad de "adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atenté contra su integridad o perjudique su propiedad". De este modo las mujeres y las autoridades deben dejar de actuar sobre los hechos consumados, eliminándose la indefensión.

***b) Responsabilidad del Estado:***

La Convención agrega de forma novedosa que violencia contra la mujer es también aquella "que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona" (NUDH C – 1981, Arto 2), aceptando la tesis de que aunque la violación a los derechos humanos no sólo la realiza el Estado, siempre tiene responsabilidad porque la "tolera". Si bien la Convención no permite sancionar directamente al agresor privado si lo considera agente violador, permite que las mujeres puedan responsabilizar al Estado cuando éste no sanciona o previene adecuadamente la violencia privada.

La responsabilidad inmediata de los Estados, contenida en el NUDH C – 1981, Arto 7, nos permite una relación con lo que hemos denominado acciones dirigidas al sistema jurídico en general y principalmente a las transformaciones que impliquen el componente formal-normativo (norma *agendi-ley),* el estructural (las instituciones que las crean, las aplican y las tutelan), y el político-cultural (que comprenden las leyes no escritas).

Ley 779, Art. 8. Formas de violencia contra la mujer (incisos a, b, c, d, e, f, g), reconoce la responsabilidad del Estado más allá del campo jurídico y establece que en este problema se requiere de la adopción de medidas dirigidas a otros ámbitos y la participación de la sociedad. Al respecto incluirá entre otros:

a) Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

b) Violencia física: Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.

c) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Aquella realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a la

justicia y a las políticas públicas.

d) Violencia laboral contra las mujeres: Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

e) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja. También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

f) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental,

la autodeterminación o su desarrollo personal.

g) Violencia sexual: Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual, independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco.

Para efectos de una mejor comprensión de los alcances de los principios y normas jurídicas internacionales relacionadas con el tema violencia de género y su aplicabilidad, será sistematizado mediantes cuadros normativos con comentarios, que serán de utilidad para quienes realicen la tarea de resolver los casos en esta materia.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, que tiene origen en la construcción social de los roles de género, se manifiesta en formas muy diversas y se acepta como natural; lo cual puede favorecer que las mujeres, vivan múltiples formas de maltrato sin ser conscientes de ello ni del impacto que esta situación tiene en su cuerpo y sus emociones. En este sentido la tarea permanente del modelo es una atención integral que atienda las necesidades apremiantes para el apoyo y empoderamiento.

Esta investigación permite conocer la aplicación de la técnica de litigación oral, en el ambienta del derecho universal de las víctimas de violencia de género, no se quiso hacerla en otro campo, porque es de mayor importancia para la protección del derecho internacional de la mujer.

# Antecedentes

El movimiento mundial de mujeres junto con algunos Estados comprometidos en erradicar la violencia de genero contra las mujeres, han dedicado muchos de sus esfuerzos en prevenir, sancionar, atender y erradicar las diferentes manifestaciones de la violencia en los diferentes espacios que de una u otra forma contribuyen a perpetuar la desigualdad social entre hombres y mujeres.

En las tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer, (1975-1980-1985) -ciudad de México, Copenhague y Nairobi, y en los foros paralelos organizados por organizaciones no gubernamentales, el movimiento de mujeres propuso que se discutiera el tema de la violencia contra la mujer y se prestara especial atención a las restricciones que la violencia le impone a la participación plena de la mujer en la sociedad.

Las Estrategias de Nairobi Orientadas Hacia el Futuro para el Adelanto de la Mujer, establecieron la preocupación de la comunidad internacional y reconocieron la responsabilidad de los gobiernos en la erradicación de la violencia. En 1986, la CIM comenzó el análisis de la violencia que afecta a las mujeres y, entre otras medidas, aprobó el Plan de Acción en el cual la violencia contra la mujer fue considerada en el capítulo de “Áreas de interés especial”, juntamente con otros temas.

La importancia y trascendencia social del problema fue captada por la CIM, que la considera uno de sus temas prioritarios. En 1990 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publico las «Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Interamericana sobre Mujer y Violencia ». En 1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que pone en vigor la Convención de la Mujeres, adopta la ΑRecomendación N. 19 sobre Violencia contra las Mujeres.

Esta recomendación declara que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación en contra de ellas, reflejando y perpetuando su subordinación, por lo que se requiere que los Estados eliminen la violencia en todas las esferas. Los países que han ratificado la CEDAW deben preparar reportes cada cuatro años incluyendo información tanto acerca de las leyes y de la incidencia de la violencia contra las mujeres, como de las medidas adoptadas para enfrentarla.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos y hace un llamado para que se integre la perspectiva de género tanto en los mecanismos desarrollados como en los niveles internacional, regional y nacional para eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la ΑDeclaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (G.A. resolución 48/104) que es obligatoria para todos los miembros de Naciones Unidas y que debe ser puesta en vigor internacionalmente a través de los comités de tratados relevantes, incluyendo el de la CEDAW.

En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombra a Radhika Coomaraswamy, como la primera Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, con un mandato que le permite recibir quejas e iniciar investigaciones sobre violencia contra las mujeres en todos los países miembros de Naciones Unidas.

El 9 de junio de 1994, después de tres años de estudio y consultas con los gobiernos de la región, en base a un documento elaborado por expertos convocados por la CIM, ésta logró la aprobación por aclamación en el vigesimocuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Belém do Pará, Brasil, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Esta aprobación, la primera en el mundo de una legislación internacional sobre mujer y la violencia, demuestra el reconocimiento por parte de los países de la importancia que reviste el problema y su voluntad de progresar dentro de esta materia. Según la Convención la CIM tiene la responsabilidad de tomar medidas positivas para avanzar en la implementación de la misma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tiene el poder de oir quejas contra los Estados que la han ratificado. Y en ese mismo año, la Vigesimoséptima Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres adopta el Plan estratégico de Acción de la Comisión Interamericana de Mujeres. El Plan de Acción enfatiza la participación y la contribución de la mujer de los Estados miembros de la OEA en los procesos políticos, jurídicos, sociales y económicos de sus países, su grado de participación y las acciones estratégicas necesarias para asegurar y fortalecer su papel. El Plan de Acción identifica varias áreas estratégicas de actividad. No obstante, la CIM asignó prioridad,

para los próximos cinco años, a la participación de la mujer en las estructuras de poder y en la toma de decisiones, a la educación, a la eliminación de la violencia y a la erradicación de la pobreza. Asimismo, en 1994 el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo reconoce que la violencia de género es un obstáculo para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para su educación y participación en el desarrollo y hace un llamado a los Estados para implementar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la CEDAW. Igualmente, en este año, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2000, aprobado por los gobiernos durante su Conferencia Preparatoria en mar de Plata, Argentina, en su Area V, Derechos Humanos, Paz y Violencia, fija tres objetivos: (1) Consolidar el pleno respeto de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) de las mujeres de la región, en un marco que otorgue prioridad a la eliminación de la violencia y de la discriminación en virtud del sexo, así como a los derechos de las mujeres más pobres y de las desarraigadas, tomando en consideración las diferencias étnicas y raciales. (2) Promover acciones que vuelvan visible todos los tipos y formas de violencia contra las mujeres y que conduzcan a su eliminación. (3) Sensibilizar a los medios de comunicación sobre el impacto de la difusión de la cultura de la violencia, con el objeto de erradicar la imagen de las mujeres que en ellas se presenta, la cual es producto de la discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedica, por vez primera, en 1995, una sección de su ΑInforme sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití al tema de la violencia sexual infringida contra las mujeres durante el régimen ilegal de Haití, y declara que la violación constituye una forma de tortura según la Convención Americana de Derechos Humanos.

Nicaragua

El Estado de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, registra durante el periodo de 2016 a 2018 , un total de 57 denuncias tipificadas como “Femicidio”, 11 ocurridos en el 2016, 25 durante el 2017 y 21 entre enero y octubre 2018. Se registra un 100% de operatividad por parte de la Policía Nacional, es decir, todas las denuncias fueron esclarecidas, determinándose los autores y remitidas las investigaciones al Ministerio Público.

En Nicaragua, la violencia intrafamiliar y sexual es un grave problema que afecta directamente a las mujeres nicaragüenses y que ha sido denunciado de manera reiterada por la Sociedad Civil, quienes han solicitado políticas públicas que contribuyan a eliminar esta forma de violencia patriarcal y resarcir el daño de la víctima. En respuesta a esta situación, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID)se ha identificado la necesidad de abordar la violencia de género en toda su integralidad y de acuerdo a la complejidad del fenómeno. Este proyecto apoya y apoyará a las instituciones públicas que de manera directa o indirecta trabajan con las víctimas de violencia de género, en la prestación de servicios públicos para contribuir a que se impulse de manera conjunta una intervención de los distintos sectores y dar una respuesta integral a las víctimas. El marco teórico del que partimos es poner en marcha un modelo de intervención desde la perspectiva de género, que tenga por finalidad la recuperación de la víctima, su reinserción laboral, es decir, la transformación de la mujer-víctima en una mujer con su propio proyecto de vida. Otro tema importante para la erradicación de la violencia contra las mujeres es la reducción de la impunidad, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de las mujeres y la de sus hijos e hijas. Es un proyecto que se desarolla y desarrollará en Managua y el Distrito VIyII y en Puerto Cabezas en la Región Atlántico Norte RAAN.

El Gobierno de la Republica de Nicaragua frente a la demanda de la población, que a través de las organizaciones de mujeres ha venido impulsando un trabajo por la igualdad, ha suscrito acuerdos internacionales en materia de género, y ha participado en los distintos espacios como ((la CEDAW, la Plataforma para la Acción de Beijing, etc.), y también responde a los objetivos del Milenio tal como han sido adoptados por la comunidad internacional y toma en cuenta la próxima revisión de los mismos de cara al 2005 y 2015.

Como una iniciativa de gobierno, el INIM en el esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de esos compromisos contraídos y lograr el enfoque de equidad de género en la implementación del PND (2005-2015) se ha planteado la necesidad impostergable de formular un Programa Nacional de Equidad de Género dándole contenidos y enfoque de género a las prioridades de la política global de desarrollo: área económico-productiva, de gobernabilidad y de desarrollo humano, a la que se suma la de lucha contra la violencia de género que tiene un carácter transversal. Asimismo, se plantea de modo coordinado con los diversos programas sectoriales existentes en materia de salud, educación, lucha contra la violencia, etc., buscando mejorarlos y complementarlos desde una perspectiva de género.

Poderjudicial.gob.ni/Politica\_de\_Genero\_de\_la\_CSJ. Los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado de Nicaragua Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, Nicaragua ha firmado y ratificado un conjunto de Tratados Internaciones que disponen la implementación de políticas activas en defensa de los derechos de la niñez, la adolescencia y la mujer.

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) Se trata de una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, en París. Constituye el documento macro que regula las relaciones jurídicas y sociales sobre la base de un conjunto de derechos humanos universales, aplicables a todos los seres humanos. Proclama en su Art. 1 el siguiente principio universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y precisa: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Art. 2).
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCP, por su sigla en inglés) El Pacto es un tratado multilateral que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y se encuentra consignado en la Constitución Política de Nicaragua (Art. 46). El Art. 2 de este tratado expresa que los Estados partes asumen la obligación, respecto de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos. Esto implica que deben abstenerse de violar estos derechos, pero que deben también adoptar medidas positivas para que aquellos sean efectivos. De acuerdo al Art. 14 del Pacto, los Estados partes deben poner a disposición de toda víctima de una violación un recurso imparcial y efectivo para su defensa.
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por su sigla en inglés) Este Pacto es un tratado multilateral general que reconoce derechos de segunda generación y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976 y aparece consignado en el Art. 46 de la Constitución Política de Nicaragua.
4. Convención Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (CADH) Conocida también como “Pacto de San José de Costa Rica”, la Convención fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Se encuentra consignada en el Art. 46 de la Constitución Política de Nicaragua.
5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) Conocida como CEDAW, por sus siglas en ingles, esta Convención de la ONU entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981. Reafirma la igualdad de derechos del hombre y la mujer, así como el principio de la no discriminación. Reitera la obligación de los Estados Partes de garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Pero reconoce que, a pesar de los esfuerzos y avances realizados, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, como en los casos de extrema pobreza, donde ellas tienen un limitado acceso a la alimentación, la salud, la educación, la capacitación y las oportunidades de empleo.
6. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) Se trata de la Resolución 48/104 de la Asamblea General de la ONU. Esta Declaración define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
7. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Declaración de Beijing) Los Estados participantes en esta Cuarta Conferencia acordaron, en septiembre de 1995, promover y proteger los derechos humanos de la mujer mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, particularmente aquellos que garantizan la igualdad y la no discriminación. Cada Estado participante se compromete a incorporar la perspectiva de género en todos sus programas y políticas públicas. Los Estados adoptaron también una Plataforma de Acción que contiene tres principios fundamentales: (a) la habilitación de la mujer; (b) la promoción de los derechos humanos de la mujer; y (c) la promoción de la igualdad de la mujer.
8. Convención de Belém do Pará (1994). Llamada así por haberse realizado en Belém do Pará, la Convención Interamericana para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer representa uno de los avances más importantes en la defensa de los derechos de la mujer, porque obliga los Estados partes de la Organización de Estados Americanos (OEA), a incorporar en su legislación penal normas que penalicen la violencia basada en género.

Marco Jurídico de políticas para reivindicar los derechos de las mujeres.

La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y sus reformas de 1995 La Ley Fundamental de la Nación establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Afirma además que no habrá discriminación alguna por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social (Art. 27 Cn). Establece asimismo que es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre todos los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

Códigos:

Código de la Niñez y la Adolescencia (1998).

Código de Procedimiento Penal (2001).

Código Penal (2008)

Leyes:

Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos (1982).

Ley para Disolución del Matrimonio por Voluntad de una de las Partes

(1988).

Ley de Alimentos y su Reforma (1992).

Ley de Responsabilidad Paterna y Materna y su Reglamento (2007).

Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (2008).

LEY No. 779, “LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No . 641, “CÓDIGO PENAL””, CON SUS REFORMAS INCORPORADAS

# Planteamiento del problema.

EL“Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua” – MAI, basado en un nuevo procedimiento para el abordaje de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, a partir de los convenios, convenciones y tratados internacionales, la aplicación de éstos en la legislación nacional y la disponibilidad de los recursos para su implementación con la efectiva aplicación de la Técnicas de Litigación Oral utilizando el ámbito de La Ley 779 se va a realizar un protocolo de atención e interpretación de las leyes relacionadas con la violencia de género.

**El problema**

Aplicación de la Técnica de Litigación oral en la atención de víctimas de violencia de género, conforme el programa MAI, Nueva Segovia 2019.

# Objetivos

* 1. **Objetivo General**

Evaluar la Técnicas de Litigación Oral en el Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Género por Ministerio de Ley del departamento de Nueva Segovia.

* 1. **Objetivos específicos**

1. Verificar el actuar de cada órgano involucrado en el cumplimiento del modelo de atención integral (MAI) implementado para la atención integral especializada a víctimas.
2. Describir el acompañamiento a la víctima una vez finalizado el proceso Judicial en el juzgado de Distrito Penal de audiencia y violencia de género

# Preguntas Directrices.

¿Cómo es el actuar del Fiscal, del Juez, del Acusado, del Defensor?, está de acuerdo al cumplimiento del modelo de atención integral (MAI) implementado para la atención integral especializada a víctimas.

¿Qué acompañamiento recibió la víctima una vez finalizado el proceso Judicial en el juzgado de Distrito Penal de audiencia y violencia de género?

1. **Marco Teórico**

**Violencia de género.**

Etimológicamente “violentia” violencia es “la acción y efecto de violentar”. La violencia tiene como significado implícito la presencia de un desequilibrio de poder, la “acción que se realiza con brusquedad o fuerza excesivas con la finalidad de causar daño. Actitud de la persona que abusa de la fuerza con esta finalidad”, o puede relacionarse con la acción o efecto de violentarse; a una manera de actuar contra el natural modo de proceder. La palabra violencia remite al concepto de fuerza y se corresponde con verbos tales como violentar, violar, y forzar. En Filosofía, violencia tanto puede ser una “acción contraria al orden o a la disposición de la naturaleza” como también “acción contraria al orden moral jurídico o político.

Cuando se da en la familia es el punto de partida generador de más violencia. Se ve a diario como madres y padres experimentan violencia tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo poco adecuado a sus hijos.

**El origen de la violencia factores** de riesgo de violencia las actitudes, las creencias y conductas que están arraigadas en el entorno social, los patrones de comportamiento violentos frecuentemente pasan de generación en generación.

El hecho de haber visto durante la niñez o la adolescencia maltrato entre el padre y la madre, ha sido identificado como uno de los mayores factores de riesgo para el maltrato en las edades adultas.

**Patrón de violencia**

Es importante mencionar que la violencia física puede ocurrir sólo una vez o repetirse, pero cuando no se denuncia siempre se produce una escalada de intensidad y frecuencia; basta con evocar la primera agresión por medio de amenazas o un gesto para que la memoria reactive el evento o la induzca a someterse de nuevo. También se ha dado el caso en que, cuando la mujer reacciona ante los golpes y los devuelve, el hombre invierte la situación en beneficio propio al acusar de violencia a su compañera y arremete con mayor intensidad.

**Proceso de Violencia**

Se genera la desvalorización continua; erosiona la autoestima hasta impedir por completo cualquier intento de reafirmación y el debilitamiento permite el aumento del abuso. Una segunda etapa consiste en que los abusadores imponen sus propios valores a sus parejas, quienes con el tiempo empiezan a considerar que su valor está determinado, casi totalmente, por la conducta de su abusador; por lo que se definen las siguientes etapas:

**Cosificación**: La conducta del abusador hace que la pareja se sienta un objeto, sin energía interna y sin recursos ni deseos. Se manifiesta a partir de exigencias para adecuarse a las necesidades y deseos del abusador o abusadora, como usar una determinada ropa o arreglo personal, negando la personalidad que la víctima podría haber manifestado a partir de un estilo propio. Una segunda manifestación es el estado físico a través del suministro de tranquilizantes. Finalmente, a partir de un carácter sumamente posesivo manifestado por celos excesivos, se presenta una restricción de contactos sociales o actividades, o invasión de sus espacios privados, los cuales van despersonalizando la parte pasiva de la dinámica de maltrato y, por ende, se le cosifica. Mediante este proceso se tiene menos consciencia del derecho de ser tratadas como seres humanos, con dignidad, con respeto a su privacidad.

**Sobrecarga de responsabilidades:** Es una de las manifestaciones más difíciles de reconocer para quien la vive; se culpa a la parte pasiva de los problemas compartidos, mientras la parte activa se niega a asumir su responsabilidad, agobia a la pareja y, en los casos extremos, la paraliza.

**Distorsión de la realidad**: Consiste en sembrar constantemente dudas en el otro, tanto en su forma de ser como en conductas o eventos vividos; puede llegar a ser tan severa esta acción que la víctima puede dudar de lo que percibe de la realidad. En ocasiones, el agresor utiliza a personas allegadas para validar su postura colocando a la víctima en mayor indefensión.

**Todas estas maniobras**, consideradas de modo independiente, podrían enmarcarse en una disputa de pareja clásica, pero lo que constituye la violencia es la repetición y la duración, así como la simetría en los intercambios.

Porque, la No Denuncia

Una de cada 3 mujeres que experimentó violencia, no lo denunció, siendo más frecuente en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. Para mujeres víctimas, el no confiar en nadie fue una de las razones de continuidad de agresiones y a la vez considerar que no era grave o que era algo normal. Para quienes han sufrido violencia física y sexual constante, la no denuncia fue por temor a más violencia solamente algún porcentaje manifestó no haber buscado asistencia por no saber dónde ir, siendo en su mayoría las más jóvenes.

La violencia de género es un fenómeno multicausal, fundamentado en los roles diferenciados y asimétricos, que coloca a las mujeres en posiciones de subordinación y a los hombres de dominación; pero esto en casos menos comunes, adjudicándoles distintos valores sociales y económicos.

Estos factores de orden cultural contribuyen a producir y perpetuar la violencia. En este sentido, se identifican tres factores:

1. Roles estereotipados asumidos rígidamente
2. Relaciones de dominación, poder y subordinación de la mujer en la pareja
3. Contexto social que valida la violencia

En Nicaragua se reconocen diversas causas que reproducen la violencia intrafamiliar y sexual, tales como:

Los patrones culturales y los códigos de crianza, el uso de la violencia como método de enseñanza y sanción a la que fue objeto en su infancia y que reproduce en el futuro, la fijación de los roles de género y el sistema de valores, los cuales marcan una relación desigual de subordinación y poder. Cuando el poder se siente amenazado, reprime con violencia, situación que también se da por el hecho de no poder cumplir por falta de empleo o pobreza con el rol de proveedor asignado socialmente al hombre; y de esta forma cada factor genera una nueva personalidad en el perjudicado directo, denominado **VICTIMA.**

**Modelo de atención Integral (MAI):**

Las Instituciones del Sistema de Justicia que son parte de la ruta de acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas como son: Policía Nacional – PN a través de las Comisaría de la Mujer y de la Niñez – CMN, el Ministerio Público (MP) la Corte Suprema de Justicia – CSJ, el Instituto de Medicina Legal – IML suscribieron un Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia de género con el propósito de proteger los derechos, en especial el derecho a vivir libre de violencia por razones de género. Este acuerdo ha posibilitado la concertación de voluntades, capacidades, funciones y acciones de instancias vinculadas a los sectores de justicia, salud y protección, tomando como referencia el marco jurídico internacional y nacional, fundamentalmente la Ley No. 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641,“Código Penal”.

A partir de dicho acuerdo, las instituciones señaladas han elaborado una propuesta de “Modelo de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua” – MAI, basado en un nuevo procedimiento para el abordaje de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, a partir de los convenios, convenciones y tratados internacionales, la aplicación de éstos en la legislación nacional y la disponibilidad de los recursos para su implementación.

El Modelo de Atención Integral (MAI) es un conjunto de procedimientos de gestión, que está encaminado a fortalecer la articulación del sistema de atención para proteger a las víctimas de delitos, realizando acciones de investigación, persecución y sanción penal desde el conocimiento del hecho, hasta su recuperación, resarcimiento de daños y restitución de sus derechos.

Tiene como objetivo “Contribuir al efectivo acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes para alcanzar la restitución de su derecho a vivir con dignidad y libre de violencia”. Dicho modelo se está implementado en el Distrito 5 y 2 de Managua y Bilwi en Puerto Cabezas, se espera su implementación va hacer en todo el país por etapas. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Round2-FollowUp-ShadowReport-Nicaragua.pdf

**Convención sobre la Eliminación en Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).** **NUDH C – 1981**

Estamos ante uno de los más importantes instrumentos de su tipo, y su adopción en el seno de las Naciones Unidas constituye un hito en el proceso del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. En el logro de este paso hay que destacar el papel que desempeñó en su elaboración la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer. Esta desarrolló una estrategia encaminada a generar las condiciones propicias en el seno de la comunidad internacional, para el avance en la protección de los derechos de las mujeres en el campo de la "no discriminación" y otros.(Bustelo García, 1990; p. 209-225).

Los Estados Partes reconocen la opresión en que viven las mujeres, a partir de que el sexo es tomado como elemento para un tratamiento discriminatorio. Esta situación viola el principio de igualdad, por lo cual se considera que debe ser corregida. Reconoce, pues, la existencia de situaciones desiguales a priori, que debe modificarse, las cuales hacen evidente la desigual condición jurídica, política, social, cultural y económica de la mujer durante siglos. En consecuencia, el objetivo es el cambio social como medio para conseguir la igualdad de trato dentro del marco de la igualdad jurídica.

Define en su contenido (NUDH C – 1981, art. 1º) la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad con el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.

Aunque son muchos los aspectos que la Convención destacaremos tres fundamentales que se desprenden de la definición "sobre lo que es discriminación y la acción de discriminar":

Una ley puede ser discriminatoria si tiene por resultado la discriminación de las mujeres, aunque no se haya promulgado con la intención o con el objeto de discriminarla. Incluso puede haber sido promulgada con toda la intención de "proteger" o "elevar" la condición de las mujeres, pero si su resultado es contrario a esto, será una ley discriminatoria.

Si los Estados la han ratificado, su definición de discriminación se convierte en lo que LEGALMENTE se debe interpretar. Consecuentemente, definiciones más restrictivas contenidas en los sistemas jurídicos internos y aplicados en el ejercicio de la tutela judicial por los diferentes operadores/as jurídicos, deberían en principio ser modificadas o no ser consideradas legalmente. (Cook, 1997; p. 226-254).

**NUDH C – 1981 art 5** "los patrones socioculturales". En esta línea de ampliar el universo de situaciones sociales que nos faciliten el reconocimiento y la erradicación de nuevas formas que discriminan a las mujeres, la Convención agrega como elemento innovador.

Se pretende no necesariamente igualar las mujeres a los hombres sino valorar las diferencias y las semejanzas entre unas y otros, sin que ninguna de las dos situaciones sea la justificación de la desigualdad.

 **Principios Básicos**

Las presentes propuestas de principios son básicas para el quehacer de las/os operadores de justicia para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia sin discriminación alguna para las mujeres y para analizar los casos desde una perspectiva integral.

Se enmarca dentro de los estándares de los derechos humanos se fundamenta en una serie de valores y principios que se extraen de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.

En efecto, la comunidad internacional ha establecido una serie de valores y principios deseables por medio del derecho internacional de los derechos humanos, valores que se fundamentan en la dignidad propia de los seres humanos sin admitir relativismos cuando hay circunstancias como el sexo de la persona, la edad, etnia, las preferencias sexuales, la discapacidad, etc. Estos valores están dirigidos a mejorar la supervivencia y convivencia de la humanidad ayudando a conseguir la armonía, solidaridad, paz e igualdad a las que se aspira.

Desde estos valores se derivan principios, que en sentido ético son aquellos juicios prácticos que surgen inmediatamente de la aceptación de un valor. Por ejemplo, del valor vida humana se origina el principio de respeto a todo ser humano, del cual se deriva la igualdad, la no discriminación, la justicia, el acceso a la justicia.

En el caso de los derechos humanos de las mujeres se desarrollan una serie de principios generales de interpretación que se caracterizan por:

 Ser enunciados básicos que se aplican en situaciones donde las normas jurídicas y los hechos a interpretar son vagos e imprecisos.

 Tener un sentido lógico que se armoniza entre sí.

 Servir como principios orientadores para la interpretación de los derechos de las mujeres, para que tengan efectos prácticos.

 Servir como fuentes supletorias para interpretar o integrar normas y crear derechos.

 ***Principio de Igualdad:*** Todas las personas deben tener igualdad en condiciones en el acceso, goce y ejercicio de los derechos tanto de jure (derecho) como de facto (hecho) sin discriminación alguna ya sea por sexo, raza, idioma, color, religión, opinión política, discapacidad, edad, reconociendo la diversidad de las condiciones como parte inherente de las y los sujetos en la sociedad, a ser tomadas en cuenta y no consideradas

como un obstáculo para su inclusión. Las palabras “todo derecho a la diferencia presupone[…]la igualdad” lo que claramente deja como conclusión que mi diferencia debe ser analizada, valorada y ponderada como digna del mismo respeto que los otros/as (Amoros,2005).

En virtud de lo anterior no es suficiente con establecer formalmente que tanto hombres como mujeres son iguales ante la ley, se hace necesario reconocer que el ser el hombre o mujer en la sociedad patriarcal plantea un punto de partida asimétrico. Pretender que la aplicación del derecho a la igualdad sea neutra o imparcial en términos de género es negar la situación de discriminación, subordinación y opresión que sufren las mujeres. Ignorar esto es obviar que sobre las diferencias biológicas se establecen discursos de género que justifican las desigualdades, que impiden que las mujeres tengan el mismo acceso a los derechos que los hombres, tales como al empleo, a la educación, a la justicia, entre otros. Desde esta lectura crítica que sostienen autoras y autores del principio de igualdad es imperativo la de-construcción de este para lo cual es necesario conjugar la igualdad formal con el material y la valoración de la diferencia. Esto nos permitirá cuestionar el androcentrismo y buscar resultados que no contengan rasgos sexistas.

Estableciéndose que no es suficiente con que se dé el reconocimiento de la igualdad formal ante la Ley (Facio, 2008). sino que se requiere que estos derechos sean una realidad para las mujeres que son la mitad de la población, dando razón así de la diversidad existente sin discriminación alguna en la materialidad de sus vidas.

Es indispensable tener presente que principio de igualdad es un principio jurídico universal que no es estático. La Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW ) aporta a la resignificación de la noción de la igualdad sustantiva, material o por resultado. La igualdad sustantiva hace referencia a dos prohibiciones en el actuar:

o La primera se refiere a las prohibiciones de las discriminaciones directas, es decir, de toda norma o acto jurídico-público que signifique un trato perjudicial en función de la pertenencia a uno u otro sexo o identidad de género.

o La segunda a las prohibiciones indirectas, o sea, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros o no discriminatorios pero de los cuales se derivan consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tiene sobre las personas.

La igualdad material exige considerar tanto a hombres como mujeres iguales en el goce, ejercicio, protección de los derechos humanos garantizando las condiciones materiales para que esto se cumpla, en este sentido, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha señalado: “El Sistema Interamericano no sólo recoge una noción formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables y, por lo tanto a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias, sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural que parte del reconocimiento que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de equiparación. Ello implica la necesidad de trato diferenciado, cuando, debido a las circunstancias que afectan a un grupo desventajado, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso a un servicio, o bien el ejercicio de un derecho.

Jurisprudencia de referencia:

Caso CIDH, María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala, Caso 11.625, Informe Nº 28/98. La Comisión sostuvo que “se espera un tratamiento equitativo de la ley para hombres y mujeres, a menos que se hayan aducido motivos justos, legítimos y razonables imperiosos para justificar una diferencia de tratamiento”. Luego, la CIDH introdujo la idea de que “las distinciones previstas en la ley y basadas en criterios relativos a la condición, como, por ejemplo, la raza o el sexo, necesariamente dan lugar a un examen minucioso”, en el cual “se tendrían que esgrimir razones de peso para justificar una distinción basada exclusivamente en el sexo.

 ***Principio de No Discriminación:*** El principio de igualdad de las personas y la consecuente ilegitimidad de la discriminación, forman parte de los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos; Ley No. 779, Capítulo II Principios, fuentes y derechos, articulo 4, Principios rectores de la Ley, literal I.

Para el derecho internacional la no discriminación incluye dos nociones:

o La primera refiere al principio de no discriminación como concepción negativa de la igualdad, esto significa que prohíbe diferencias que no se pueden justificar con criterios razonables y objetivos y que sean utilizadas para negar la condición de ser humano.

o La segunda, a una concepción positiva, o principio de protección, relacionada con la obligación de los Estados de principio de protección que se desarrolla entre otras por medio de medidas especiales dirigidas a la consecución de la igualdad real o positiva.

Desde este punto de vista el contenido moderno de la discriminación se construye con la prohibición de las distinciones que son irrelevantes, arbitrarias, no razonables, injustas, dirigidas a la negación del goce, disfrute y tutela de los derechos de grupos o personas.

La discriminación se configura en dos acepciones, “tratar diferente a lo que es igual” como en el caso de igual trabajo igual remuneración que no se aplica en muchas situaciones que en ese ámbito viven las mujeres. Y,

“tratar igual a lo que es diferente” cuando se requiere legislar y tomar en cuenta las asimetrías de género, ejemplo de esto es el uso del tiempo, o la corresponsabilidad en la educación y el cuidado.

Los diferentes instrumentos internacionales coinciden en elementos para la definición de discriminación, sin embargo es la CEDAW la que avanza sustancialmente en ella. En su Artículo1 se define discriminación como:

“*toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil y en cualquier otra esfera”* **NUDH C – 1981 art 1**

Esta definición tiene una triple importancia:

1. Establece que una ley o política discrimina si su resultado es discriminatorio, aun cuando tenga la intención de favorecer;

2. Define lo que legalmente se debe entender por discriminación contra la mujer;

3. Declara discriminatoria toda restricción basada en el sexo, que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

A partir de esta concepción, las restricciones que sufrimos las mujeres no sólo en la esfera pública sino en el campo cultural y doméstico, deben conceptuarse como discriminatorias (Facio, 1995).

Jurisprudencia de referencia:

Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. La Corte en esta sentencia determina responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Belén do Pará. Asimismo, analiza y determina el alcance de las obligaciones que surgen a partir de la ratificación de la Convención Belén Do Pará, concluyó que en el caso en concreto, la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación, razón por la cual, el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las tres víctimas; y en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de las y los familiares de las víctimas.

 ***Principio Pro persona:*** Seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre ya sea interna o internacional, esto implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio

Jurisprudencia de referencia:

Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. Voto Concurrente De La Jueza Rhadys Abreu Blondet, de 31 de agosto de 2010. En relación a la fijación de la reparación considera que el Tribunal está en la capacidad de determinar cuál podría ser una medida de reparación apropiada o al menos fijar los estándares que deberían respetar aquellas políticas que ejecute el Estado. No debe dejarse una decisión tan importante como la de fijación de las reparaciones apropiadas a la víctima únicamente a la diligencia o no de las partes en el proceso, ya que la falta de la Comisión Interamericana o de los representantes de las víctimas de fundamentar sus respectivas solicitudes no puede dejar a la víctima desprovista de tales medidas, de los principios iuranovit curia y pro homine en la interpretación de los tratados de derechos humanos.

 ***Vivir una vida libre de violencia.***

Vivir una vida libre de violencia, se constituye en el principio ético, el valor fundamental a ser protegido, en medio de una sociedad que ha ido naturalizando todas las formas de violencia que se dan contra las mujeres con un claro sesgo de género.

La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades: el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la protección en condiciones de igualdad, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.

Es relevante destacar que el concepto violencia contra las mujeres tiene un significado jurídico propio dado que la definición de delito de violencia contra las mujeres es aceptada a nivel internacional en los términos definidos en los instrumentos internacionales creados para el efecto, a saber: La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de diciembre de 1993, y para la región la Convención Interamericana para prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do Pará.

La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención Belem Do Pará - es el primer tratado internacional que se aboca a la violencia contra las mujeres de forma explícita, define a la violencia contra la mujer como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” pag 23, Agrega que debe entenderse que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial ampliando las expresiones de realización de la violencia y asegurando garantía integral para las víctimas.

Asimismo como antecedente a la promulgación de la Convención contamos con la Recomendación General de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) No. 19 que establece la relación entre violencia y discriminación, al determinar la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, o que le afecta en forma desproporcionada, como otra forma de discriminación. Incluye actos que infligen daño o sufrimientos de índole física, letal o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de libertad, pero también puede ser causa de muerte.

En este contexto queda claramente establecida la relación entre violencia y discriminación, dos fenómenos producto de relaciones de poder desigual, que se constituyen en contundentes violaciones a los derechos humanos.

Para la realización del principio a vivir una vida libre de violencia es fundamental entender que la violencia contra las mujeres es estructural, así mismo se debe distinguir con claridad al menos dos campos de legitimación y realización de esa violencia:

o En primer lugar la violencia simbólica ejercida por las instituciones tales como el derecho y los medios de comunicación social y otros constructores que tienen autoridad y legitimidad como los políticos, técnicos, expertos, periodistas, etc.

o En segundo lugar la violencia material y concreta y que está legitimada por la simbólica.

Ambas formas perpetúan el continuum de la violencia contra las mujeres. (Radford y Rusell, 1994).

Jurisprudencia de referencia:

CIDH. María Da PenhaMaiaFernandes contra Brasil. 16 de abril 2001, Informe Nº 54/01 Caso 12.051, Estableció frente a una petición individual el vínculo entre la discriminación y la violencia de la que son objeto las mujeres. Este caso, presentado por una víctima de violencia doméstica en Brasil, permitió a la CIDH aplicar la Convención de Belém do Pará por primera vez y decidir que el Estado no había actuado con la debida

diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al victimario.

 ***Integralidad e Interdependencia de los Derechos Humanos:*** El principio de integralidad de los derechos humanos significa que cada persona por el solo hecho de nacer tiene el derecho de gozar de todos los derechos humanos, que el disfrute de uno de ellos significa el disfrute de los demás, y que la violación de uno de ellos implica la violación de los demás derechos.

Los derechos humanos están relacionados entre sí lo que implica que la violación de uno de ellos tiene repercusiones en el goce y disfrute de otros derechos humanos. El ser humano es integral, un daño no solo impacta en una esfera, sino que incide holísticamente en todos los ámbitos del quehacer humano. (Jiménez, 2012).

Jurisprudencia de referencia:

Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C Nº 216, La Corte Interamericana declaró que el Estado mexicano es responsable de violaren perjuicio de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, los derechos humanos relativos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, las garantías judiciales, la protección judicial, a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio (en el caso de Inés), los derechos de la niña (en el caso de Valentina); de incumplir el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como incumplir la obligación general de garantizar, sin discriminación el derecho de acceso a la justicia. En relación a la violación sexual que sufrieron ambas mujeres fue calificada como tortura, en vista de que se acreditaron los elementos de intencionalidad, sufrimiento físico/mental severo y finalidad

 ***Valoración de la Diversidad:*** Un principio que se fundamenta en que todos/as los seres humanos son igualmente diferentes, iguales en derechos en toda la diversidad que cada condición humana puede contener. Afirmación que rompe con el paradigma de lo humano establecido por la sociedad patriarcal, que toma al hombre masculino como el único modelo posible, pues la valoración de la diversidad incluye a todos los humanos diferentes, diversos excluidos de ese modelo único – hegemónico. Este principio, entonces, cuestiona los modelos de hombre o mujer hegemónicos y visibiliza las diversidades conforme a la edad, condición económica, orientación sexual, sexo, género, condición de discapacidad entre otras, reconociendo la interseccionalidad de condiciones que en efecto interactúan en la persona humana.Las personas son producto de múltiples condiciones identitarias que conforman esas diversas formas de ser mujeres y de vivir o no la feminidad. Este principio implica también la superación de la mirada binaria del fenómeno jurídico que además de restringir la comprensión del ejercicio de derechos, también influye en el juzgamiento cuando se trata de violación a los mismos.

Jurisprudencia de referencia:

Atala Riffo 2012. Corte IDH. y niñas vs. Chile

Los hechos del presente caso se relacionan con el proceso de custodia o tuición que fue interpuesto ante los tribunales chilenos por el padre de las niñas M., V. y R.1 en contra de la señora Karen AtalaRiffo por considerar que su orientación sexual y su convivencia con una pareja del mismo sexo producirían un daño a las tres niñas. En este sentido, la Corte tuvo que resolver, entre otros elementos, la responsabilidad internacional del Estado por el alegado trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R... Para estos efectos, la Corte analizó, entre otros, los argumentos expuestos por la sentencia de la Corte Suprema y la decisión de tuición provisoria del Juzgado de Menores de Villarrica.

 ***Autonomía Personal:*** Un principio que refiere a la capacidad jurídica y de actuar real de las mujeres en tanto sujetos plenos de derechos y obligaciones. Ello implica el derecho que tienen todas las mujeres de tomar libremente todas las decisiones de su vida, desde escoger cómo vestirse, qué estudiar, cómo administra sus recursos económicos, hasta disponer de su propio cuerpo.

Jurisprudencia de referencia:

Corte Constitucional de Colombia la sentencia C- 355 de 2006 Referencia: expedientes D- 6122, 6123 y 6124 Demandas de inconstitucionalidad contra los Arts. 122, 123 (parcial), 124, modificados por el Art. 14 de la Ley

890 de 2004, y 32, numeral 7, de la ley 599 de 2000 Código Penal. Magistrados Ponentes: Dr. Jaime Araújo Rentería Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

En este caso se reconoce la potestad de legislador para adoptar medidas de carácter penal que protejan la vida en gestación. De tal suerte que la sanción del aborto por el Código Penal resulta ajustada a la Constitución Política, pero esa prohibición tiene límites claros en la efectividad y vigencia de los otros derechos en conflicto, particularmente los derechos de las mujeres. En esa medida dado que la penalización absoluta del aborto implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la vida del nasciturus, y el sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada es inconstitucional, pues una regulación penal que sancione el aborto en todos los supuestos significa desconocer completamente su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación, negando su autonomía personal.

 ***Acceso a la justicia:*** Implica sustancialmente que las mujeres tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos, la existencia de facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad,

movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales, que, a su vez, garanticen una justicia pronta y cumplida (OEA; Corte IDH, s.f). Actualmente es considerado el derecho al acceso a la justicia como una norma*iuscogens*que genera la obligación en los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para hacerlo efectivo (Audiencia temática ante OEA, 2008) en la misma condición se encuentra el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo (Opinión Consultiva OC-18/03; 2003) constituyéndose todos en estándares máximos de tutela pro persona (Cebada, 2002).

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en su artículo segundo, inciso c)el compromiso de los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres, y a garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas.

En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 13 que: “*Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”*

Es así como la Justicia y el acceso a la misma es fuente de construcción de derechos, cuya realización se materializa en el quehacer desde las Cortes que se constituyen en el ámbito donde se medirá la eficacia o garantía real de los derechos de los/as diversos/as sujetos. Desde las cortes y juzgados se orienta a los l l as legisladores, se interpretan y se aplican los criterios de prohibición de discriminación y se determinan los déficit de protección existente, se cuestionan y se modifican los patrones socioculturales que son la base de la discriminaciones.

Jurisprudencia de referencia:

Castro 2006, Serie C Nº 160 El tribunal consideró que dicho instrumento constituye una referencia de interpretación de la Convención y añadió de manera puntual que de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por el Perú, este tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana, pero además conforme a las obligaciones específicas que le imponen las convenciones especializadas que ha suscrito y ratificado en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra las mujeres.

 ***Reparación y resarcimiento:*** Las instancias que administran justicia deben establecer los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

La obligación de reparar tiene una doble dimensión:

o una dimensión sustantiva que debe traducirse en la obligación de reparar el daño sufrido, mediante un conjunto de medidas: Restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición;

o una dimensión procesal como medio para garantizar ese resarcimiento sustantivo. Ésta última se subsume en el concepto de la obligación de proporcionar “recursos internos efectivos”, explícito en la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Jurisprudencia de referencia:

González 2009. La Corte en esta sentencia determina responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Belém do Pará.

Asimismo, analiza y determina el alcance de las obligaciones que surgen a partir de la ratificación de la Convención Belém Do Pará, concluyó que en el caso en concreto, la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación, razón por la cual, el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las tres víctimas; y en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de las y los familiares de las víctimas. De especial relevancia es que en la Sentencia del Campo Algodonero, la Corte establece el importante precedente de que los homicidios por razones de género de las mujeres no sean considerados casos aislados “sino una situación estructural y un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y la mentalidad y que estas situaciones están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”.

 ***No re victimización:*** El derecho al acceso a la justicia se relaciona con otros de especial consideración como son los derechos de las víctimas que conlleva la prohibición de las discriminaciones que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema jurídico, siendo el propio sistema el que victimiza a quien se dirige a él pidiendo justicia. Son las llamadas “víctimas del proceso”, que son las personas ofendidas que sufren daño en sus derechos fundamentales, en su dignidad humana y en la consecución de la justicia, debido a la falla del sistema jurídico.

En materia de violencia de género contra las mujeres, las autoridades judiciales deberán asegurarse que los agresores se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar dañar o poner en peligro la integridad física, sexual, patrimonial y emocional de la víctima sin distinción por razones de género, edad, etnia, discapacidad, clase social, etc. También deberá asegurarse que el proceso tenga el menor impacto en la integridad física y emocional de la víctima.

Jurisprudencia de referencia:

Jessica Lenahan 201, Es el primer caso internacional llevado por una sobreviviente de violencia doméstica contra los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la falla del Estado de actuar con debida diligencia para proteger a las mujeres de la violencia doméstica, constituye una forma de discriminación que niega el derecho a la igual protección de la ley y menoscaba el derecho a la vida de las mujeres y sus familias.

 ***Celeridad:*** Este principio establece que las pretensiones de las mujeres víctimas de la violencia deberán ser atendidas y solucionadas sin exceder el plazo fijado por las leyes.

El principio de celeridad debe armonizar:

o La oportunidad de la administración de justicia para conocer de las peticiones formuladas, la procedencia de la vía procesal escogida la pertinencia de las pruebas para una decisión justa.

o El interés de las partes o de los sujetos procesales para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez.

Este principio se convierte en uno de los requerimientos primordiales del debido proceso ya que tanto la sociedad como las partes esperan la gestión del órgano juzgador. El incumplimiento del principio incide en la credibilidad y confianza que se tenga del órgano juzgador.

Jurisprudencia de referencia:

María Da Penha Maia Fernades, 2016, Caso 12.051, Estableció frente a una petición individual el vínculo entre la discriminación y la violencia de la que son objeto las mujeres. Este caso, presentado por una víctima de violencia doméstica en Brasil, permitió a la CIDH aplicar la Convención de Belém do Pará por primera vez y decidir que el Estado no había actuado con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al victimario.

 ***Debida diligencia del Estado:*** El Estado debe hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para lograr la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres.

El principio de debida diligencia está relacionado con los tres niveles de responsabilidad del Estado:

o Respetar un derecho generalmente significa que el Estado no debe violarlo directamente y debe reconocerlo como derecho humano en su legislación. Esto quiere decir que todos los Estados que son parte de cualquier instrumento de derechos humanos están obligados a reconocer el derecho a la igualdad ante la ley de mujeres y hombres.

o Proteger un derecho significa promulgar todas las leyes sustantivas y procesales necesarias para proteger ese derecho, así como crear los mecanismos para prevenir la violación de ese derecho y los mecanismos e

instituciones necesarias para denunciar su violación así como lograr su reparación.

o Cumplir o garantizar un derecho significa adoptar las medidas necesarias y crear las instituciones y los procedimientos, así como la distribución de recursos, para permitir que todas las personas puedan gozar sin discriminación de ese derecho.

La debida diligencia en materia de violencia contra las mujeres establece el deber del Estado para prevenir, responder, proteger y proporcionar remedios por actos de violencia contra la mujer, tanto si esos actos son cometidos por el Estado como por agentes no estatales. En el apartado c) del artículo 4 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General en 1993, se insta a los Estados a "proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a los Estados en su Recomendación general Nº 19 (1992) que actuaran con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer y responder a ella. En el plano regional, el apartad b) del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) (Convención de Belém do Pará) requiere que los Estados actúen "con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".

Jurisprudencia de referencia:

La Corte observó que la investigación –incompleta- llevada a cabo por el estado desatendió algunas violaciones a derechos humanos que tuvieron lugar durante la masacre, como por ejemplo, torturas y otros hechos de violencia llevados a cabo en contra de mujeres y niños/as. En consecuencia, la Corte sostuvo que Guatemala incumplió con las obligaciones impuestas por la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará, tras no haber investigado sobre los hechos de violencia y violencia sexual contra las mujeres, que revestían particular gravedad al estar enmarcados en un contexto de conflicto armado y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del estado. Para la Corte es una obligación del estado adoptar una perspectiva de género a la hora de investigar violaciones a los derechos humanos, sobre todo en casos como este en los que la violencia contra las mujeres fue deliberada.

**Respuesta de los Estados Latinoamericanos para tratar a las Víctimas de Violencia de Género.**

Ante la visibilidad del problema, el aumento en las denuncias y su presencia en los medios de comunicación, los Estados han reaccionado por medio de la formulación de nuevas leyes y de la adecuación de las ya existentes. Según el informe de PNUD y ONU Mujeres «Del compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe» de 2017, 24 de los 33 países de Latinoamérica tienen leyes contra la violencia doméstica, pero solamente 16 han tipificado penalmente el feminicidio, lo que sirve de indicador de la disparidad en el reconocimiento del problema. Es decir, la mayoría de los Estados de Latinoamérica únicamente se ha limitado a atender actos de violencia que históricamente han sido denunciados por las mujeres, mismos en los que se ha solicitado la intervención del Estado.

Los 24 países, de los 33 de la región, que cuentan exclusivamente con leyes que sancionan la violencia doméstica son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Es de resaltar que algunas leyes han ampliado la protección. Por ejemplo, en Brasil, el feminicidio está tipificado como un crimen atroz; en Chile se revisó la ley de violencia intrafamiliar por medio de consultas con la sociedad civil y, finalmente, San Cristóbal y Nieves tipificaron la violencia sexual y la violación como delitos graves.

Existen índices muy bajos de denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia, mientras que el número de hechos violentos en contra de las mujeres aumenta y se diversifica.

Actualmente, únicamente 9 de los 33 países abordan los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres, dentro de los cuales destacan los siguientes: **Colombia,** cuya legislación contempla los crímenes con ácido, la violencia sexual en los conflictos armados y el feminicidio como expresiones de la violencia contra la mujer; **Nicaragua,** que incorpora la trata de personas como forma de violencia; **Venezuela**, que contempla la inducción al suicidio como forma extrema de violencia; **México**, donde se realizan regularmente campañas de concientización sobre la igualdad y su legislación, al menos a nivel federal, ha evolucionado para ser más protectora; y **Bolivia,** país pionero en abordar la violencia contra mujeres candidatas a puestos de elección popular.

Con base en lo anterior, se puede percibir que Latinoamérica es una región que avanza en materia de legislación, con leyes que poco a poco abordan los componentes físicos, psicológicos, sexuales, económicos y patrimoniales de la violencia. Esta evolución normativa es resultado del esfuerzo de feministas que han luchado por posicionar la violencia contra las mujeres en la agenda pública y política de los países de la región. De tal forma que estas leyes, en la mayoría de los casos, han ido acompañadas de campañas de concientización, pero también del aumento de las penas y las sanciones, apostando por el sistema penal como instrumento para erradicación de la violencia.

Lo anterior es reflejo de los problemas y limitaciones en su aplicación a los que se han enfrentado las legislaciones que buscan atender la violencia contra las mujeres, pues **dichas normas han carecido de una perspectiva integral** que tenga a la víctima en el centro del proceso. Esto comprendido desde el ámbito de capacidades institucionales, pues **en la mayoría de los países no existen protocolos de actuación y de coordinación interinstitucional** entre las fiscalías y las policías de investigación, los médicos peritos, los hospitales o centros de salud y su personal, y los tribunales involucrados.

Los funcionarios públicos de dichas instituciones no cuentan con la capacitación para poder atender con perspectiva de género los casos que llegan a ellos. Incluso, organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo mujeres víctimas de violencia son revictimizadas por servidores públicos durante el proceso de atención o ni siquiera son atendidas por la falta de comprensión del problema, como el caso de las fiscalías. Aunado a lo anterior, se encuentra la impunidad en los procesos de justicia, donde jueces y peritos carecen de herramientas de análisis que promuevan la perspectiva de género y ayuden a sancionar a las personas culpables.

También **son necesarias políticas integrales de atención a la violencia,** que deben iniciar por la prevención, que debe incluir el cambio de los paradigmas patriarcales y el combate a los patrones e instituciones culturales que normalizan y naturalizan esta violencia. En este sentido, la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia de género implica una transformación cultural de las sociedades latinoamericanas, por lo que el involucramiento de los sistemas educativos que existen en los países de la región es vital para que el trabajo de prevención.

Es necesario considerar que el desarrollo de legislaciones que atiendan de forma integral la violencia contra las mujeres y busquen erradicarlas, no son el único instrumento con el que cuenta el Estado para dichos objetivos. De hecho, estas legislaciones deberán estar acompañadas de políticas públicas, principalmente enfocadas en la transformación de los patrones socioculturales del país, como estrategia de prevención de la violencia.

**Marco Legal de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia.**

En el ámbito internacional se han adoptado un conjunto de instrumentos legales internacionales relacionados a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, y específicamente, para prevenir la violencia de género.

Para la ONU estos instrumentos constituyen un conjunto de “estándares para las medidas que deben tomar los Estados a fin de cumplir sus obligaciones jurídicas y sus compromisos de políticas para hacer frente a la violencia contra la mujer”. (ONU: 2006, p. 284) .AGREGAR A LA LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El Estado Nicaragüense es signatario de casi la totalidad de los instrumentos internacionales, que reconocen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, la obligación de sancionar a los responsables **y el deber de brindar a las mujeres víctimas de violencia a recibir atención integral.**

A continuación se analizan las principales disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado y que son exigibles en el territorio nacional.

**Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,** fue adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 y se encuentra en vigor desde el 3 de septiembre de 1981. Nicaragua la aprobó y ratificó por el Decreto No. 789 de 10 de agosto de 1981, publicado en La Gaceta No. 191 de 25 de agosto de 1981.

**Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer “Convención de Belém do Pará”.** Este instrumento vinculante del sistema interamericano fue ratificado por la Asamblea Nacional a través del Decreto No. 52-95, del 6 de Octubre de 1995 y publicado en La Gaceta No. 203 del 30 de Octubre de 1995.Por medio de este instrumento se establece que la violencia –física, sexual y económica- hacia las mujeres constituye una violación al ejercicio de sus derechos humanos que debe ser tipificada como delito en las legislaciones nacionales. La Convención establece las siguientes obligaciones de los Estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer.

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967).

Esta Declaración es el primer instrumento que pone de relieve la discriminación de la que son víctimas las mujeres en todas las partes del mundo. Asimismo, establece que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas, inclusive medidas legislativas, para combatir todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de mujeres. (Arto. 8)

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer:

Por medio de la Declaración se llama a los Estados a “condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla.” (Arto. 4). En materia de atención a la víctima la declaración estimula a los Estados para que se esfuercen por garantizar: “que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. .¿REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA?

Por medio de la Declaración se llama a los Estados a “condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla.” (Arto. 4) Condenar la violencia contra la mujer, Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales.

Ley 779, Contra la Violencia hacia la Mujer[[1]](#footnote-1)

Esta iniciativa de ley define y tipifica todas las formas de violencia que se producen contra las mujeres y establece procedimientos rápidos para otorgar medidas de protección a las víctimas y mandata la responsabilidad estatal de formular una política pública de prevención atención y sanción de la violencia hacia la mujer. (Asamblea, Ley 779, Ley Integral Contra la violencia hacia la mujer y sus reformas., 2014)

Aunque la legislación penal ya tipifica y penaliza los delitos contra la libertad e integridad sexual, esta iniciativa pretende que se penalicen otras manifestaciones de violencia contra la mujer, que se producen en todos los ámbitos, que aún no son considerados hechos punibles. (Asamblea, Ley 779, Ley Integral Contra la violencia hacia la mujer y sus reformas., 2014)

La iniciativa de ley propone la modificación de los tipos penales establecidos en el Código Penal vigente y la adición de nuevos delitos, tales como el feminicidio, sustracción patrimonial, Daño Patrimonial, Limitación al ejercicio del derecho de propiedad, Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares, Restricción a la autodeterminación, Sustracción de hijos o hijas, Violencia Laboral, Conductas Sexuales Inapropiadas.

Asimismo, la iniciativa **mandata la formulación de una Política de Prevención Atención, Protección para a las mujeres víctimas de violencia,** cuyo objetivo será garantizar medidas para atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia.

**La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993**: “reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos y hace un llamado para que se integre la perspectiva de género tanto en los mecanismos desarrollados como en los niveles internacional, regional y nacional para eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres”

**Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 1994** Para efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado por lo que los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la prensa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exaltan la violencia contra la mujer.(Justicia, 2012)

**La CEDAW en el Derecho Penal y Procesal Penal** La CEDAW, conocida como la Convención de la Mujer, fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Entró en vigor en septiembre de 1981, 30 días después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación. Fue ratificada por Nicaragua en 1981. Es el principal instrumento internacional legal de Derechos Humanos para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. **Es regida por tres principios básicos:**

1- El principio de igualdad de resultados (igualdad basada en la diferencia)

2- El principio de no discriminación (tratar igual a lo que es diferente)

3- El principio de responsabilidad estatal

Constitución Política de la República de Nicaragua

La Constitución Política es la principal norma del ordenamiento jurídico nacional, las disposiciones en ella contenidas no pueden ser contradichas por ningún tipo de ley. A continuación se enuncian las principales disposición constitucionales sobre los derechos de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia.(Asamblea, Constitucion Politica de Nicaragua, 2014)

Las leyes pueden tener disposiciones explicitas o implícitas en relación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia; las primeras son aquellas en las que se enuncian textualmente, mientras las segundas, se infieren por el espíritu y contenido de la ley.

En relación al derecho a vivir libres de violencia, el texto constitucional contiene disposiciones explícitas e implícitas, por ejemplo:

**Artículo 5, párrafo 1:** Son principios de la nación nicaragüense, **la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana**, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias, y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.(Asamblea, Constitucion Politica de Nicaragua, 2014)

**Artículo 36** Toda persona tiene derecho a que se **respete su integridad física, psíquica y moral.** Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.

**Artículo 48** Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, **existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.**

Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

**Artículo 71** Es derecho de los nicaragüenses constituir una familia. Se garantiza el patrimonio familiar, que es inembargable y exento de toda carga pública. La ley regulará y protegerá estos derechos.(Asamblea, Constitucion Politica de Nicaragua, 2014)

La niñez goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la Convención internacional de los derechos del niño y la niña.

De estos artículos se desprende los derechos a mujeres víctimas de violencia.

**El Código Penal, Ley No. 641** fue publicado en La Gaceta Nos. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008.

El Código Penal, aprobado en 2008, tipifica y sanciona los delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual de las personas y establece las medidas de protección especial o medidas cautelares orientada a garantizar los derechos de las víctimas de violencia. La sanción con penas de cárcel a las personas que ejerzan violencia física, psicológica o sexual contra las mujeres, es una de las medidas más importantes para terminar con la impunidad, ya que permite llevar a los responsables ante la justicia.(Asamblea, Codigo Penal de la Republica de Nicaragua, 2015)

Uno de los principios del Código Penal es el reconocimiento y protección de los derechos de la víctima, la que debe “ser tratada por la justicia penal con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. (Arto. 5)(Asamblea, Codigo Penal de la Republica de Nicaragua, 2015)

**El Código Procesal Penal**, Ley No. 406, fue aprobado el 13 de Noviembre del 2001 y publicado en La Gaceta No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001.

La norma procesal establece que, durante el proceso judicial, todos los actores que intervienen, deben resguardar los derechos y la integridad de las víctimas.(Asamblea, Codigo Procesal Penal de Nicaragua, 2014)

Proteger la dignidad de la víctima implica que las personas abogadas y quienes representan a la Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público, Juzgados de Distritos Penal Especializados en Violencia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Profesionales de diversas disciplinas y Defensoría Pública, personas imputadas y deben dirigirse a la víctima con respeto, evitando el uso de términos que les hagan sentir culpables o que dañen su autoestima.(Asamblea, Codigo Procesal Penal de Nicaragua, 2014)

Asimismo, **se reconoce el derecho de las víctimas a recibir atención integral (médica, psicológica, jurídica, albergue),** la que debe ser brindada por el Ministerio Público a través de una instancia especializada, en coordinación con la Policía Nacional y las instituciones estatales de salud física y mental y con las entidades de servicio y proyección social de las universidades estatales y asociaciones privadas civiles o religiosas.

Ley de la Policía Nacional.

La Ley de la Policía Nacional, Ley No. 228, fue aprobada el 31 de Julio de 1996 y publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de Agosto de 1996.

**La Ley de la Policía Nacional**: Mujeres y hombres de la Policía Nacional encargados de investigar la comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual deben tratar a las víctimas con respeto, consideración, garantizando que no serán victimizadas ni expuestas inadecuadamente ante los órganos del sistema de justicia.

**Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades:** La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, Ley No. 648 fue aprobada el 14 de Febrero del 2008 y publicada en La Gaceta No. 51 del 12 de Marzo del 2008

**Técnicas de Litigación Oral**.

Consideramos que la litigación penal en juicios orales es al mismo tiempo un [arte](https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml) y una [ciencia](https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml), y por ello los abogados litigantes deben ser ambas cosas a la vez, artistas y científicos. [La ciencia](https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml) de la litigación penal oral consiste en parte de las normas procesales. El Código Procesal Penal contiene reglas referidas a la prueba; existen formas correctas e incorrectas de formular las preguntas y las objeciones; es una técnica que puede ser trasmitida y se puede aprender, implican reglas y estrategias que deben ser estudiadas y aplicadas.

Existe una técnica de litigación, tanto para la acusación como para la defensa, y los abogados litigantes deben conocerla en profundidad, a los efectos de adquirir las habilidades y destrezas que les permitan organizar su tarea y cumplirla con la solvencia que requiere un juicio oral y público a partir de las siguientes destrezas:

**Teoría del Caso**

La [teoría](https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml) del caso es la herramienta más importante para organizar nuestra labor en el juicio oral y público, así como también para que el caso cause el impacto necesario en el Juzgado, teniendo en cuenta que debe existir un [pensamiento](https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml) lógico jurídico en el momento de argumentar oralmente, a fin de obtener el mayor beneficio. La teoría del caso se define como la estrategia plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar.

La teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista, Siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones de [competencia](https://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml) se puede observar la información que el juicio arroja. Se trata de proveer al Juez desde un punto de vista convincente, pues si no lo hacemos, estaríamos dando lugar a que la contraparte gane terreno. Para formular la teoría del caso es indispensable conocer el hecho para determinar la [investigación](https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml) de la [dirección](https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml) y la formulación de la acusación. Es el vehículo ideal para planificar y ejecutar la práctica de la prueba a tener un [concepto](https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml) claro de la relevancia de cada pieza dentro del esquema, determinar la forma en que se efectuara el interrogatorio, así como el lugar que dentro del engranaje ocupa cada prueba y la forma en que se demuestran los hechos argumentados en la teoría formulada. (Baytelman Aronowky Andres, 2004)

Es necesario además, advertir que manejar más de una teoría del caso resulta perjudicial de nuestro [desempeño](https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml) en el juicio oral, es decir, lo importante es elaborar una teoría del caso, y en [función](https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml) a ella dirigir el actuar durante todo el juicio; de lo contrario perjudicará a nuestro caso y perderemos credibilidad. En consecuencia, es importante decidir correctamente la teoría del caso a ser utilizada, a fin de demostrarle al Tribunal que el derecho le asiste a nuestra parte.

**La teoría del caso se compone por:**

**Teoría fáctica:** se describen los hechos dando respuesta a las preguntas; Cuándo?, dónde?, qué? Ocurrió además quien lo realizo?, cómo?, dónde el orden de los factores que expresen las ideas

**Teoría jurídica:** La forma de cómo se relacionan diversas formas penales aplicadas a los hechos de un modo coherente.

**Teoría probatoria:** Obviamente la prueba es el elemento que inclinara la balanza en cualquiera de dos hipótesis jurídicas, la teoría jurídica no es eficiente si no tiene base fáctica que la sostenga o sino tiene una fundamentación probatoria que la haga creíble.

Alegato de Apertura.

Es la primera intervención de las partes en el juicio oral mediante la cual presentan ante el juez su teoría del caso, indicando a los jueces, cómo durante el curso de la audiencia demostrarán que dicha teoría del caso es la que se conforma, de manera más precisa, a las pruebas que se rendirán y al derecho aplicable al caso.

Es el primer relato de las partes ante el juez técnico o jurado, cuyo objetivo principal es dar a conocer la teoría del caso y ofrecer a los jueces una mirada particular sobre los hechos. También puede conceptualizarse como aquel relato inicial que presenta los hechos desde la posición de cada litigante, con el objeto de ofrecer una óptica, lente, o mirada coherente, completa y creíble de los mismos, a partir de la cual los jueces logren ordenar, entender y aceptar los hechos del caso. Regido a partir del artículo 303 de CPP, en el cual establece orden de intervenciones de las partes procesales y no debemos obviar que es el momento procesal en el cual cada litigante se encargara de ofrecer una promesa de lo que presenta en el caso. (Baytelman Aronowky Andres, 2004)

De lo que se trata es de intentar persuadir al juez con una teoría del caso definida, que logre formar en el tribunal una imagen de lo ocurrido y a partir de la cual pueda seguir la presentación de las evidencias del caso para que pueda de modo más sencillo, entender las distintas escenas que componen el caso, pudiendo de esta forma darle coherencia a los distintos momentos del desarrollo del mismo. En general, lo que hace el litigante, y obligatoriamente el fiscal, es mostrar las piezas centrales que constituyen el caso de una manera ordenada y comprensible. La claridad, orden, sistematicidad y organización de la información y de los relatos es crucial. Se necesita que los jueces entiendan qué es lo que la prueba va a decir. Significa explicarles a los jueces, en la versión más sencilla posible, en qué consiste el caso y cuál es la hoja de ruta para la prueba. Otro defecto muy común de litigación es que las partes comiencen a emitir conclusiones y a argumentar acerca de la prueba en este momento inicial del juicio. (Baytelman Aronowky Andres, 2004)

Es importante tomar en cuenta aspectos estratégicos como:

1. Los jueces no conocen el caso
2. La credibilidad se construye a partir del alegato de apertura
3. Es la presentación de hechos y no de conclusiones
4. Cuidar la extensión del alegato de apertura
5. No incorporar opiniones personales
6. Evitar exagerar la prueba
7. Anticipar debilidades y explicarlas razonablemente
8. Cuidar detalles
9. Humanizar el tema

**Examen Directo de los testigos**

Se trata de la revisión de los testigos propios durante el desarrollo del juicio oral a través de preguntas formuladas por el litigante que los presenta que busca el ingreso de afirmaciones de hechos que son jurídicamente relevantes para acreditar la versión de esa parte. Es la principal oportunidad con que un abogado cuenta para narrar y probar su historia, permitiéndole al tribunal revivir la versión de los hechos de su cliente, de esta forma se desarrolla el relato que permite comprobación de nuestras proposiciones fácticas y el éxito de nuestra teoría del caso.

**Objetivo principal del examen directo al testigo**

Extraer del testigo la información que requerimos para construir la historia o trozo de historia que este nos puede proporcionar.

**Estructura del examen directo**

**Preparar al testigo:** Ilustrar al testigo acerca de su rol en el juicio y del marco general en que este se desarrollará. Debe dársele toda la información que sea necesaria para que el testigo **tenga claridad acerca de lo que hará** en la sala de audiencia, cómo se inserta eso en el contexto general del juicio y cuáles son sus derechos y las expectativas del sistema frente a su declaración. Es muy importante que el testigo sepa que cuenta con ciertos derechos al momento de declarar así como es indispensable que el testigo cuente con información acerca del caso mismo, que le permita identificar en lo posible qué porciones de su relato son relevantes para el juicio. Es relevante que al momento de prestar testimonio estén medianamente enfocados, y no se pierda tiempo con información irrelevante. Que el testigo pueda experimentar el escenario que enfrentará en el juicio oral con la formulación de preguntas que se le realizarán en juicio.

**Juramento o promesa de decir la verdad y preguntas generales de la ley**

Normalmente, el/la testigo está sometido/a al juramento o promesa de decir la verdad, lo que significa que, en caso de que se demostrase que ha mentido, incurriría en un delito de falso testimonio. Por ello, antes del inicio del interrogatorio, el/la juez le tomará juramento o promesa, y le informará sobre las sanciones establecidas contra quien declare falsamente.

La testigo responderá “sí juro/sí prometo', comprometiéndose de este modo a decir únicamente la verdad de lo que conoce a lo largo del interrogatorio.

No tendrá el deber de declarar si existe algún impedimento legal (por ejemplo un secreto profesional). Tampoco tendrá el deber de declarar contra el mismo o contra su cónyuge o pareja de hecho, hermanos, o parientes dentro del segundo grado, si bien podrá hacer las manifestaciones que considere oportunas.

El/la testigo deberá indicar sus datos de identidad, si conoce a las partes, si existe relación de parentesco con alguna de ellas, amistad o cualquier otro tipo de relación, y si fue procesado por algún delito.

**Preguntas de acreditación de testigos.**

La declaración del testigo se inicia con las preguntas sobre su identidad, circunstancias generales que demuestren su solvencia moral, su credibilidad, su falta de interés en el asunto, imparcialidad o su apego a la justicia universal. Se resaltan aquí aspectos personales y profesionales del testigo. El propósito del interrogatorio es obtener del testigo, en un orden lógico y claro para el juez o jurado, sus observaciones y actividades, para que estos últimos entiendan, acepten y recuerden su testimonio. Es claro que ningún juez o jurado tendrán por cierto lo que ni siquiera han oído, o lo que es manifiestamente incoherente a pesar del interrogatorio y del contrainterrogatorio.

Un clásico diseño de técnicas para el debate en el derecho anglosajon recomienda el siguiente orden testifical:

1. Testigo presencial
2. Primer Policía en llegar a la escena
3. Conductor de ambulancia
4. Patólogo
5. Testigo presencial
6. Policía que efectuó el arresto
7. Policía que condujo la investigación

El testigo es el protagonista en el examen directo y no el abogado, dado que de el proviene la investigación y sus respuestas pueden ser adecuadas a: preguntas abiertas y preguntas cerradas, produciendo un testimonio en leguaje común conciso y preciso. La credibilidad del testigo se base en la honestidad y veracidad, fiabilidad confirmación.

Entre los tipos de testigos tenemos: Argumentativos, evasivos, hostil y difuso.

**El contraexamen**

Cuando nos referimos al contraexamen es cuestionar la credibilidad personal de un testigo, su valor como fuente de información. Esta es la versión más confrontacional del contraexamen.

Entre los elementos de la línea del contraexamen tenemos: El interés y la Conducta Previa del Testigo. Subyace la idea común de que el testigo no está siendo veraz, en alguna versión y grado, porque tiene un interés personal comprometido con el resultado del juicio.

En el caso de la conducta previa, se trata de la idea de que este testigo ha faltado a la verdad antes y no hay razón para creer que no lo esté haciendo ahora también.

En ambos casos, sin embargo, hay que tener cuidado con la vieja cultura inquisitiva de valoración legal de la prueba – que sigue causando estragos en nuestras mentes por mucho que modifiquemos los códigos – y con el nuevo escenario impuesto por la libre valoración de la prueba.

**Objeciones**

La objeción básicamente es una potestad a las partes de interrumpir un interrogatorio, contrainterrogatorio, repreguntas o recontra interrogatorio, en virtud de que se considera que una de la preguntas no cumple los lineamientos básicos establecidos por el código o cuando implica una violación a la dignidad y derechos fundamentales. Así existirá la oportunidad de la contraparte de impugnar los cuestionamientos cuando infrinjan las reglas que establezca la ley, además, atendiendo que en un sistema acusatorio se propicia la imparcialidad del órgano jurisdiccional, el mismo de oficio no puede objetar o calificar las preguntas, sino que la misma actuación queda a cargo de los abogados, y el juez predominantemente debe calificar la procedencia o improcedencia de la objeción que se haya planteado.

La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El Juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno.” De lo anterior encontramos dos condiciones esenciales para su correcto ejercicio, en caso de que la pregunte afecte la teoría del caso que se sustenta y una calidad extra de carácter potestativa que puede llegar a señalarse si la parte que la realiza la considera pertinente:

**Oportuna -Temporalidad:** La objeción de preguntas debe manifestarse de manera previa a que empiece a contestar el testigo, en este orden de ideas debe existir en su caso un apercibimiento del abogado que realiza las preguntas o del propio juzgador para que el medio de prueba se tome unos segundos antes de contestar, y dar oportunidad a realizar la objeción.

**Fundada:** La objeción debe realizarse por el motivo exacto y no simplemente manifestar el rechazo de la pregunta, o hacerlo por una causal distinta, de la misma manera como técnica o sugerencia de quien realiza las preguntas deberá defender la pregunta en particular por el motivo de la objeción y no por uno distinto.

**Sustentada:** Como una cuestión potestativa se puede señalar el fundamento de ley o constitucional por la cual se realiza la objeción o un argumento más desarrollado de la misma, sobre todo si se considera que la objeción encuentra su causal en una violación a derechos fundamentales.

El proceso penal camina mediante audiencias, en buena parte de ellas existe desahogo de medios de prueba, de revisión de medidas cautelares, la de juicio oral, la de individualización de sanciones y reparación del daño entre otras. En ellas se aplican las reglas de la audiencia de juicio para el efecto de desahogo, por ende, existirán interrogatorios, contrainterrogatorios y en el curso de los mismos se deberán presentar las objeciones de forma precisa cuando se consideren pertinentes.

**Alegato Final**

El alegato final emiten las conclusiones que la prueba merece; es decir, es el espacio donde el litigante analiza la prueba que se produjo en el juicio. A la vez, el alegato final no debe apartarse del contexto de lo ocurrido durante el juicio, porque siendo este un resumen analítico de todo lo sucedido, no se pueden introducir elementos foráneos.

En ese sentido, el alegato final es la última fase del juicio, llegado este momento, toda la prueba ya ha sido presentada. Es la instancia en la que se armará el rompecabezas, juntando todos los pedazos de información que se ha venido aportando en el desarrollo del juicio. Todas las actuaciones del litigante dentro del juicio oral serán dirigidas a estructurar el alegato final. Toda la información que se haya obtenido y expuesto durante el juicio se encuentra al servicio del alegato final.

El objetivo del alegato final es convencer al Tribunal que las proposiciones fácticas que han sido acreditadas durante el juicio son exactas. Además, que resultan legalmente válidas y moralmente justas.

Para lograr el objetivo se recomienda captar la atención de los jueces, que puede ser comenzando con una pregunta o premisa impactante. Obviar el uso de argumentaciones rutinarias o repetitivas. Así también el litigante debe demostrar que cree en su argumentación; de lo contrario el juzgador tampoco creerá.

**Estructura del alegato final**

Existen tres diseños de estructura del alegato final:

1. Teniendo en cuenta el orden cronológico de los hechos: se trata de presentar ordenada y secuencialmente los hechos como sucedieron, determinando en el tiempo cada suceso y estableciendo como se probó.

2. Teniendo en cuenta el orden de los cargos de la acusación: la acusación es un acto procesal que enmarca el juicio y puede tomarse de referencia para formular el alegato final, relacionando cada cargo.

3. Teniendo en cuenta los supuestos jurídicos sustanciales o procedimentales: partiendo de la norma que describe la conducta punible y configura un juicio de valor sobre la conducta o los supuestos probatorios necesarios para condenar.

A estos tres diseños de estructuración agregamos la forma básica para organizar un alegato final:

Introducción: en la que se hace referencia a la teoría del caso.

Breve descripción de los hechos: Describir las pruebas producidas, prueba por prueba, centrándonos en sus aspectos fundamentales.

Agrupar las pruebas: que tienden a demostrar cada una de las proposiciones fácticas.

Extraer inferencias o deducciones: cuando la prueba no permite llegar directamente a las conclusiones. Se debe trabajar en lo que aporta la prueba y de allí comenzar la formulación de las inferencias para que el Tribunal vaya razonando, a medida que se expone, a partir de la premisa fáctica para llegar a una conclusión determinada.

Desarrollar el proceso de razonamiento judicial: para que el juez pueda consignar las conclusiones en la sentencia.

Refutar al adversario: indicando al Tribunal que no puede acoger la teoría de la contraparte porque la prueba ha sido distorsionada o los argumentos son contradictorios, de manera que el juez llegue a una conclusión distinta a la formulada por la contraparte.

Aseverar o refutar la credibilidad de los testigos: Indicar a los jueces qué esperamos del juicio y que esto se refleje en la sentencia a ser dictada, entregándoles los argumentos que permitan acoger o desechar las peticiones de las partes; insistiendo en; hechos probados, hechos no probados, participación aceptada, participación no aceptada, etcétera.

Conclusiones: en el sentido de las exigencias del alegato.

Absolución del acusado o la atenuación de la pena o de ser el caso, cualquier otro pedido que favorezca a su defendido.

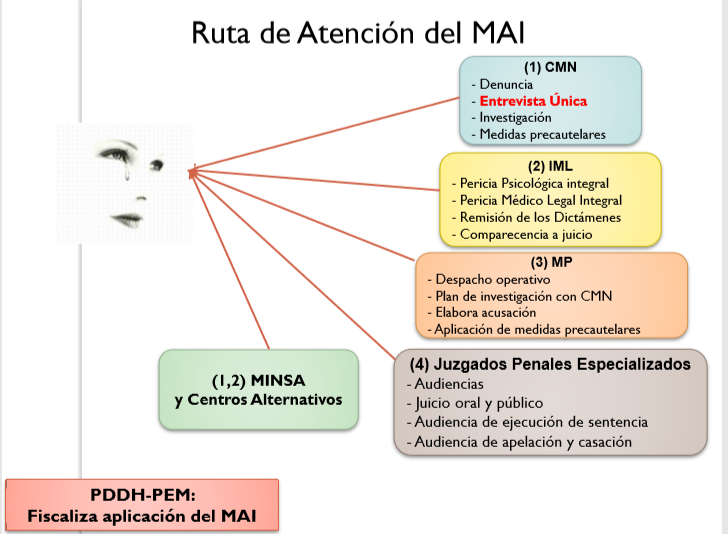
# Diseño Metodológico

**Modelo de Atención integral a Víctimas de Violencia en Nicaragua**

Por Atención Integral se entiende el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses

La atención integral es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades de la víctima por completo; involucra la colaboración de muchos profesionales, es el enfoque estándar. Se trata de un sistema avanzado dirigido a apoyar, acompañar y atender a las mujeres víctimas mediante la coordinación de todos los recursos disponibles e implicar en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada una de las etapas del proceso, ya que el problema requiere un abordaje desde múltiples planos de actuación (policial, judicial, social, laboral, educativa entre otros)

La atención integral se efectúa mediante un plan personalizado de seguridad y de autonomía para cada víctima que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración social, y contando con un profesional de referencia que la acompañe durante todo el proceso incluyendo iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptada a las circunstancias de la mujer.(Unidas, 2012)



Se entiende como el conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales. Considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios, la ruta intersectorial se construye localmente involucrando a todas las entidades corresponsables en materia de salud, protección y justicia y tomando en cuenta los análisis de la situación y de determinantes sociales de la salud en cada territorio.

En el marco del abordaje integral de las violencias de género, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolla acciones para el fortalecimiento institucional y el apoyo técnico a los departamentos, distritos y municipios priorizados para la construcción de rutas intersectoriales para la atención integral a las víctimas de violencias de género con énfasis en las violencias sexuales.

Se debe hacer énfasis que el ciclo de violencia no inicia con la denuncia pero si la atención a dicha violencia, en el momento que la víctima o terceros deciden denunciar los hechos de agresión, amenaza, manipulación etc, estos se presentan ante la Policía Nacional específicamente, Auxilio Judicial. Esta denuncia también se conoce conforme al Código Procesal Penal como Notitia Criminis que significa la primera noticia de un acto delictivo y esta notitia criminis lo puede hacer cualquier persona sin interesar si es pariente (según el nuevo C.P.P.), en este momento se obtiene una entrevista única y simultáneamente la Policía Nacional deriva oficio al Instituto de Medicina Legal para la elaboración del peritaje médico legal y peritaje psicológico

**Los principales roles y funciones de cada una de las instituciones participantes.**

**Policía Nacional**

Recepción de la denunciante o víctima. (Investigar de oficio o por denuncia, o por orden del Fiscal, cualquier hecho que pudiera constituir Delito o Falta)

Protección y atención integral especializada a las víctimas de violencia intrafamiliar Investigación de delitos Acompañamiento a las víctimas

Referir a las víctimas a las instancias públicas y privadas para garantizar el acompañamiento en el acceso a la justicia y la atención sicológica sostenida.

Esta labor es la principal puerta de entrada de las víctimas quienes acuden en búsqueda de justicia. La Policía Nacional por iniciativa propia, por denuncia, o por orden del o la fiscal deberá proceder a investigar cualquier hecho que pudiera constituir delito prestar auxilio a la víctima, realizar actos urgentes de investigación o aprehender al agresor cuando corresponda, las especialidades de Auxilio Judicial, Detectives, Inteligencia y Seguridad Pública de esta institución, tienen el mandato de apoyar y priorizar el esclarecimiento de los delitos de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes; además de los procesos de investigación, aspectos de prevención y realizarán las coordinaciones con las instituciones del Estado para el tratamiento especializado a las víctimas de violencia, aplicando los procedimientos policiales para la atención especializadas a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, así como los protocolos de actuación..

En los municipios donde no existen Comisarías de la Mujer y la Niñez, el jefe o jefa de las delegaciones policiales son los responsables de la investigación de las denuncias de los casos de violencia de género que se recepcionan.

La policía se encarga de preparar el informe o expediente, previo a ello elabora un Plan de Investigación coordinado con el Ministerio Público quién asigna un Fiscal Enlace de Género, luego la autoridad policial procede al trabajo de campo identificando la escena del crimen, realizando entrevista a testigos, entrevista a expertos, prueba pericial del trabajo social y otro tipo de pruebas que se pudiesen necesitar en el trascurso del proceso. Es también en este momento que según la ley si es necesario se aplica medida precautelar por doce días los que en la audiencia inicial será discutida.(Unidas, 2012)

**Ministerio Público**

El expediente preparado minuciosamente y cumpliendo los términos es enviado al Ministerio Público, los que mediante sus fiscales preparan la acusación. Por lo anterior, el Ministerio Público es uno de los actores principales del nuevo sistema de justicia penal y su presencia y actuación es requerida desde el inicio del proceso penal ya que es quien inicia y dirige jurídicamente las investigaciones penales. El Ministerio Público con la entrevista única orienta jurídicamente la investigación y realiza despacho operativo con la Policía Nacional. El Ministerio Público en la ruta del MAI refiere a la víctima a la Oficina de Atención de Víctima que tiene a cargo esta institución para terapia de recuperación y/o participación de la víctima en el proceso, a excepción de tres departamentos de Nicaragua que cuentan con una oficina de atención a víctima y un fiscal de género siendo Chontales (Juigalpa), Madriz (Somoto) y Managua. En los lugares donde no cuenta con esta Oficina de Atención a Víctima, se apoya de redes de centros alternativos para referencia y contra referencia a fin de brindarle a la víctima de violencia atención y seguimiento,

El Ministerio Público elabora la acusación y la presenta al juzgado competente, en este momento inicia la audiencia preliminar, audiencia inicial, preparatoria, audiencia de juicio oral y público, audiencia de ejecución de la sentencia, audiencia de apelación y casación en caso que se necesite.

La víctima en todo momento del proceso recibirá referencia de atención médica en caso necesario para ser asistida por el Ministerio de Salud MINSA o centros alternativos que brinden también atención medica sicológica, acompañamiento legal y albergues.

Instituto de Medicina Legal (IML).

Es el encargado de realizar peritaje médico legal integral y se apoya de la entrevista única. Elabora pericia psicológica, pericia del relato y pericia de lesiones psíquicas, pericia médica, pericia de lesiones físicas y recolección de evidencias, análisis de laboratorio, remisión de dictámenes, identificación de necesidades de salud, seguridad, y referencia y contrareferencia. Se exige la comparecencia de los peritos a juicio para incorporar la prueba médica y científica.

El Instituto de Medicina Legal está adscrito a la Corte Suprema de Justicia, es la entidad técnica y científica responsable de los peritajes forenses tendientes a demostrar o descartar la ocurrencia de delitos contra la vida, la integridad y la salud de las personas.

Su función como auxiliar del sistema de administración de justicia penal, consiste en la realización de pericias médico legales en el ámbito de la medicina legal clínica, psicología y psiquiatría forense, odontología forense, patología y antropología forense, serología y genética forense, toxicología forense y radiología forense.

En el ámbito de la violencia hacia las mujeres, los resultados de su labor son de fundamental importancia como medios de prueba en los juicios penales a solicitud de las instancias competentes, especialmente en lo relativo a la pericia psicológica que incorpora el relato y las lesiones psíquicas dentro del proceso probatorio.

Cuenta con un Sistema Nacional de Información Forense, que además de proporcionar importantes datos, para conocer las tendencias de la violencia, posibilita la elaboración de propuestas tendientes a su reducción y control.

Su labor la realiza de conformidad a lo establecido por las leyes penales y normativas propias, en coordinación con las instancias del sistema de administración de justicia.(Unidas, 2012).

Poder Judicial.

Los Juzgados Únicos, Locales, de Distrito Penal de Audiencia habilitados, o Especializados en Violencia, son competentes para conocer, tramitar y resolver en primera instancia los delitos establecidos en la Ley No.779. Las Salas Penales de los Tribunales de Apelaciones de las diferentes Circunscripciones, habilitadas para conocer y resolver los recursos penales establecido en la presente Ley. El Modelo de Atención Integral deberá ser observado por las Autoridades Judiciales que aplicarán la Ley 779. Todo de conformidad con la Circular emitida por la Corte Suprema de Justicia, con fecha 02 de julio, numeral 9 en la que expresa que: “El Modelo de Atención Integral, es de estricto cumplimiento para las autoridades judiciales que aplicaran la Ley” antes referida.

Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN). [[2]](#footnote-2)

El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez forman parte integral del Modelo y, por autoridad de ley, actúa con el mandato de velar por la aplicación de las medidas de protección y tutela en el caso de la niñez víctima de violencia. Desde esta perspectiva, su articulación y coordinación con las otras instituciones en esta nueva Ruta de Atención, es fundamental para el cumplimiento de sus funciones.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

La Procuraduría de la Mujer es una instancia clave en los procesos de vigilancia y fiscalización, para que las instituciones que integran el Modelo de Atención cumplan con los compromisos suscritos por el Estado de Nicaragua, tanto con sus mandatos institucionales, como con las atribuciones que puedan derivarse de la aprobación de nuevas disposiciones, leyes o reformas legales.

Principios Fundamentales del MAI.

Los siguientes principios fundamentales contenidos en el Modelo de Atención Integral, se establecen con el fin de garantizar la igualdad entre las personas, conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de la República de Nicaragua:

**Acceso a la justicia**: Las Instituciones que participan en la ruta de atención de acceso a justicia garantizan el acceso efectivo a los servicios y recursos que otorga el Estado a las víctimas, eliminando todo tipo de barreras y obstáculos que impidan este acceso.

**No victimización secundaria:** En la atención, investigación y sanción se evitan situaciones de incomprensión y reiteraciones innecesarias que puedan afectar a la víctima, reduciéndose el número de entrevistas (entrevista única) y número de funcionarias/os (dos fiscales) en el proceso.

**Celeridad e Inmediatez:** Los procedimientos realizados en el proceso de atención, investigación y sanción se realizan con agilidad, celeridad, inmediatez, sin demora y en los plazos establecidos.

**Especialización:** Para mejorar la calidad en la atención a las víctimas, las instituciones utilizan instancias y personal especializados (Juzgados Especializados en Violencia y Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público).

Integralidad: Prioriza la protección y atención integral médica, jurídica, psicológica y social centrada en la persona como sujeta de derechos.

**Ruta de Atención del MAI.**

Los ámbitos priorizados para brindar atención a víctimas son los siguientes:

1. El primer ámbito de atención priorizado es la Salud, considerando que el principal impacto de estos hechos de violencia se da en la salud física o psíquica de las mujeres, independientemente que existan o no lesiones físicas o psicológicas visibles o daños económicos cuantificables, en el ejercicio de sus competencias, la salud es y debe ser el primer ámbito de atención.
2. El segundo ámbito de atención priorizado es la Seguridad y Protección, que debe brindarse a las víctimas, tanto en términos personales como a su entorno familiar. Esto implica garantizar la aplicación de medidas de protección y precautelares tanto para ellas, hijas y/o hijos u otros miembros de su familia, sus bienes y su seguridad económica, siempre que se encuentre en alto riesgo. De igual forma, comprende el adecuado registro de los datos y de los hechos iniciales, para reunir elementos de investigación y demás elementos de información necesarios para dar base al ejercicio de la acción por el Ministerio Público.
3. El tercer y último ámbito de atención es el Judicial, responsable de garantizar la protección final a las víctimas, de conformidad con el proceso penal: esclarecer los hechos, determinar las responsabilidad del acusado, la aplicación de la pena, de las medidas cautelares o resarcimiento de los daños causados para que en justicia se proceda de acuerdo con el Arto. 7 del Código Procesal Penal.

Lo anterior implica que cada una de las instancias debe conocer y ser responsable de los ámbitos de actuación especializados que les corresponden, priorizando sin embargo su actuación de acuerdo con el flujo de atención en tres ámbitos priorizados: salud; seguridad y protección; y judicial, siguiendo ese orden de prioridades.

La implementación del MAI considera en la práctica, además de la atención integral brindada desde cada oficina de las instancias que lo integran, la característica de centros integrados que tiene la particularidad que el personal técnico de las tres instancias involucradas en los procesos de investigación, acusación y representación de las víctimas (Comisaría de la Mujer y la Niñez, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público) brindan la atención correspondiente, ubicados físicamente en un mismo edificio.

El MAI considera como puerta de entrada a la Ruta de Atención a las Comisarías de la Mujer y la Niñez, en tanto estadísticamente éstas captan el 90 por ciento de las denuncias registradas. Es conocido que las mujeres víctimas de violencia concurren a las Comisarías de manera directa, por referencia del Ministerio Público, otras instituciones gubernamentales y los Centros Alternativos de Atención.

Igualmente, las unidades de salud del MINSA son espacios institucionales de recepción inicial en muchos de los casos de violencia, especialmente en los de violencia sexual o aquellos que implican lesiones físicas graves. Este elemento es básico considerarlo, no sólo por lo que a la integridad personal física o psicológica de las mujeres se refiere, sino también por la oportunidad que puede significar el registro adecuado de los mismos y como medios de prueba en los procesos penales que de ellos se deriven, de ahí la importancia de remitir a las víctimas a las Comisarías de la Mujer y la Niñez Auxilio Judicial de la Policía Nacional para que inicien el proceso de denuncia.

En todos los casos, la actuación de las instancias tendrá en cuenta, las pautas de atención conforme los ámbitos priorizados, y los diferentes instrumentos que se utilizan en dicho proceso, como son: i) el flujo o pasos de la ruta de atención delMAI, el cual es de uso obligatorio para las instancias participantes; ii) las normas o protocolos de atención con sus respectivos formatos que son propios de cada institución, exceptuando los formatos de Entrevista Única y de Referencia y Contra referencia, que son comunes a todas las instancias; y iii) los recursos humanos especializados y materiales requeridos para su implementación.

En esta investigación se utilizó el método Inductivo ya que mediante este método observamos de manera directa la teoría para llegar a una conclusión general sobre el uso de las Técnicas de Litigación Oral y el cumplimiento en la práctica de la Atención Integral Especializada de la Víctima de Violencia de Género.

Para la recolección de datos e informaciones se utilizó material documental para una exhaustiva revisión y análisis de la información recopilada, a través de libros, artículos de revistas, reglamentos, y páginas web.

En cuanto al material no documental se llevaron a cabo entrevistas a expertos utilizando cuestionario para evaluar el alcance de conocimiento actual tanto de las técnicas de litigación oral como la atención integral especializada a las víctimas de violencia de género. Las entrevistas se realizaron a expertos del tema como: Juez, Fiscales, Defensores Particulares y víctima.

# Operacionalizacion de las Variables

|  |  |
| --- | --- |
| Variable | Ámbito legal |
| Salud | 1.     El primer ámbito de atención priorizado es la Salud, considerando que el principal impacto de estos hechos de violencia se da en la salud física o psíquica de las mujeres, independientemente que existan o no lesiones físicas o psicológicas visibles o daños económicos cuantificables, en el ejercicio de sus competencias, la salud es y debe ser el primer ámbito de atención. |
| Seguridad y Protección | 2.     El segundo ámbito de atención priorizado es la Seguridad y Protección, que debe brindarse a las víctimas, tanto en términos personales como a su entorno familiar. Esto implica garantizar la aplicación de medidas de protección y precautelares tanto para ellas, hijas y/o hijos u otros miembros de su familia, sus bienes y su seguridad económica, siempre que se encuentre en alto riesgo. De igual forma, comprende el adecuado registro de los datos y de los hechos iniciales, para reunir elementos de investigación y demás elementos de información necesarios para dar base al ejercicio de la acción por el Ministerio Público. |
| Judicial | 3.     El tercer y último ámbito de atención es el Judicial, responsable de garantizar la protección final a las víctimas, de conformidad con el proceso penal: esclarecer los hechos, determinar la responsabilidad del acusado, la aplicación de la pena, de las medidas cautelares o resarcimiento de los daños causados para que en justicia se proceda de acuerdo con el Arto. 7 del Código Procesal Penal. |

1. Descripción de los resultados
   1. **En Cuanto al Objetivo General**

Evaluar el uso de estrategias de Técnicas de Litigación Oral y el Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias y Violencia de Género por Ministerio de Ley del departamento de Nueva Segovia.

* *El Juez, el Fiscal y la Defensa conocen y están familiarizados con el uso de técnica de Litigación Oral y El Modelo Integral a las víctimas de violencia de género.*
* *Juez refirió que la mayor parte de los abogados activos en la materia de violencia de género y Ministerio Público, aplican las técnicas de litigación oral.*
* ***El Juez*** *comenta, que esta técnica oral, las objeciones son pocas y no se aplican, además el* ***Ministerio Publico*** *menciono, que se utilizan como estrategias para no re victimizar,* ***la defensa*** *coincidió con que muchas veces los litigantes no estudian la aplicación de técnicas antes de presentarse a audiencias y juicios.*
* ***Los interrogatorios y contra interrogatorios van dirigidos a mostrar teoría del caso****, donde* ***el juez*** *comento, que el judicial debe de tener sutileza y empoderamiento en este ámbito ya que en ocasiones la teoría del caso de la defensa no muestra objetividad, dejando entre ver otras situaciones ya que su única finalidad es lograr la no culpabilidad de su defendido,* ***el Ministerio Publico*** *menciona que cumple con su interrogatorio y contrainterrogatorio para demostrar su teoría y que se aplica en la declaración de testigos, la defensa por su parte menciona en cuanto a esto que tiene claro que el interrogatorio y contrainterrogatorio tiende a robustecer la teoría del caso.*
* *si* ***hacen uso de las técnicas de litigación oral en el alegato final*** *el juez nos comentó que en efecto se hace uso sobre todo porque ya se tiene una idea final de que realmente sucedió y no se permite mencionar hechos que pudieron haber pasado, esta es la etapa donde se aterriza realmente en el caso, el* ***Ministerio Público*** *establece que si se hace uso de las técnicas de litigación, hace ver si la declaración del testigo fue concordante, coincidencia de los hechos narrados, acreditación de los peritos, si se demostraron los hechos con la prueba pericial y el uso de la oralidad,* ***la defensa*** *por su parte argumenta que se utiliza las técnicas de litigación en el alegato final*
  1. **En Cuanto a los Objetivos específicos**
* Verificar el actuar de cada órgano involucrado en el cumplimiento del modelo de atención integral (MAI) implementado para la atención integral especializada a víctimas.

***Salud***

* ***En cuanto a que si humanizan las partes,*** *el* ***juez y la defensa*** *coinciden en cuanto a que considera que se hace un esfuerzo sobre todo por respetar y no tratar a la víctima como objeto, de hecho la defensa considera que es fundamental humanizar y mostrar a su defendido como inocente, según el* ***Ministerio Público*** *humanizan tratando de utilizar medios para no re victimizar, usan medios para no reprochar no revivir el momento vivido, explicar cuáles son sus derechos se remiten a un tratamiento sicológico para tratar que las víctimas superen, para que tengan un resarcimiento.*

***Seguridad y Protección***

* ***En la pregunta sobre sensibilización ante la violencia de género****, menciona* ***el juez*** *que a veces la defensa con su teoría no percibe que ofende a la víctima, cuando la califica de falsa e intenta argumentar que la llevan a crear un conflicto con su cónyuge por celos o por los bienes* ***La defensa*** *menciona ante esto que la violencia de género también la experimentan los hombres y que hay muchos casos que el hombre no denuncia, sin embargo el* ***Ministerio Publico*** *dice que las partes no siempre muestran sensibilización,* ***a veces los jueces exigen detalles irrelevantes, refieren no estar totalmente sensibilizados hacia la violencia, a veces los defensores hacen preguntas en contra del honor de la víctima.***
* ***La víctima acude sola o es acompañada al juicio a brindar su declaración****,* ***El juez*** *comento que en un noventa por ciento llega sola o con psicólogo, sin embargo, los menores llegan con tutor,* ***La defensa*** *menciona que las victimas llegan solas o con un familiar el* ***Ministerio Publico*** *menciona que si llegan solas o acompañadas ante el Ministerio Público.*

***Judicial***

* ***El juez*** *comentó que hay debilidades en cuanto a la relación oral y sucinta de los hechos y se limitan a leer el relato, por su parte* ***el Ministerio Público*** *dice que se aplican para demostrar la teoría efectiva, a pesar de que la defensa se sale de la teoría para demostrar situaciones ajenas al caso, no obstante,* ***la defensa*** *menciona que el relato debe de ser escueto y que es el Ministerio Público, debe de presentar con mayor énfasis ya que por ley le corresponde la carga probatoria*

La Victima

*La víctima considera que el juicio no le ayudó en nada, lo que significa que la Ruta de Atención no funciona ya que señala: A mi criterio no sirvió de nada el juicio porque él salió y me sigue violentando. Agrega respecto a esta atención que no ha existido seguimiento de atención psicológica de parte de intituciones: Durante el proceso fui atendida por psicólogo y posterior no he recibido ninguna atención. O sea no he hablado con nadie desde que concluyo el juicio*

Describir el acompañamiento a la víctima una vez finalizado el proceso Judicial en el juzgado de Distrito Penal de audiencia y violencia de género.

* Para **indagar si como judicial o Ministerio Público vuelve a tener contacto con la víctima**, **el juez** menciona que **no está en su competencia** dar seguimiento a la víctima por tanto no, el **Ministerio Público** dice que si hay contacto para darle seguimiento o avance, **vienen por ayuda de Médico, seguimiento sicológico, cómo va el caso en ejecución de sentencia no es siempre que vienen todas las mayoría vienen .**
* **Si la víctima recibe atención integral especializada: El juez** dice que la víctima no se le sigue dando atención especializada, ha sido critica de esto ya que se han dado casos que al acusado se le ha dado sentencia y otros agresores reinciden con la víctima por falta de protección, menciona **la defensa** que no hay institución que vele por la víctima después del proceso, sería necesario que se le dé empoderamiento a la mujer y que tenga otras opciones para poder dar un giro a su vida y no volver a caer en el mismo circulo de violencia.
* **El Ministerio Publico** argumenta que las atiende la Policía, luego las entrevista única, van a Medicina Legal, Forense, al Psicólogo, si hay daño se remite al centro o al hospital, la etapa no termina en el juicio. También está la etapa de ejecución de sentencia y la de apelación, con la entrevista única cuando no son violencia sexual

**Ruta de Atención a las Victimas**

**si se hace uso de la Ruta de atención a víctimas,** **el judicial** comento que *solo está en papel* pero no funciona actualmente, **la defensa** menciono que *La ruta del MAI solo está en papel*, ya que la víctima llegan tal vez con un familiar o solas o no llegan, así que la práctica es diferente, **Ministerio Publico** dice que de acuerdo al MAI hay una entrevista única para que no vuelvan a repetir, los médicos y sicólogos tienen modelos para entrevistar a la víctima, cuando sea necesario; es decir ellos hacen preguntas que no fueron hechas y que son necesarias, luego se remiten al Ministerio Público con Auxilio Judicial. ***El Modelo está en práctica,*** aunque no hay Comisarías de la Mujer.

# Análisis y triangulación de resultados

**Evaluar el uso de estrategias de Técnicas de Litigación Oral**

* El *Juez, el Ministerio Publico y la Defensa están de acuerdo que conocen y utilizan las técnicas de la litigación oral, pero que los litigantes no estudian la aplicación de técnicas antes de presentarse a audiencias y juicios*

**Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género**.

* *EL MAI según* ***el Juez y la defensa*** *mencionan que La ruta del MAI solo está en papel, ya que las víctimas llegan tal vez con un familiar o solas o no llegan, así que la práctica es diferente.*
* *El* ***Ministerio Publico comenta que el Modelo está en práctica,*** *aunque no hay Comisarías de la Mujer*

Verificar el actuar de cada órgano involucrado en el cumplimiento del modelo de atención integral (MAI) implementado para la atención integral especializada a víctimas.

***Salud***

* *El Juez y la Defensa coinciden en que se hace lo posible por no tratar a la víctima como objeto, la defensa considera que es fundamental humanizar y mostrar a su defendido como inocente, sin embargo, el Ministerio Publico se remiten a un tratamiento sicológico para tratar que las víctimas superen, para que tengan un resarcimiento*

***Seguridad y Protección***

* ***El Juez*** *la defensa con su teoría no percibe que ofende a la víctima,* ***La defensa*** *menciona que la violencia de género también la experimentan los hombres,* ***Ministerio Publico*** *manifiesta que los jueces exigen detalles irrelevantes, hacen preguntas en contra del honor de la víctima****.***
* *En el alegato nadie defiende la seguridad y protección de la victima*
* La víctima queda más insegura luego de someter al conocimiento de un proceso judicial la violencia que ha recibido de su pareja ya que señaló: Siento que esto no ha terminado, ese hombre me amenaza todavía, yo no puedo salir sola me da miedo, mis hijos me acompañan cada vez que quiero ir a comprar algo, en la finca que mis hijos trabajan tienen que andar juntos porque ha dicho que los va a matar y va a matarse él, ya lo intento una vez sino me salva mi cuñado no estuviera aquí, así que le digo la verdad me siento sola y desprotegida todavía. Los mismos policías dicen que ese señor está loco. A mi criterio no sirvió de nada el juicio porque él salió y me sigue violentando

***Judicial***

* *El Juez y la defensa están de acuerdo que el Ministerio Público solo se limita a leer el relato y no es escueto, esto afecta la defensa de la víctima.*
* *No hay una restitución de los derechos de la víctima ya que la víctima entrevistada consideró que el juicio no le fue útil al señalar:* A mi criterio no sirvió de nada el juicio porque él salió y me sigue violentando

# Conclusiones

Esta investigación se enfocó en el cumplimiento de Técnicas de Litigación Oral y la evaluación del Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género, en el Juzgado de Distrito de Violencia en el Departamento de Nueva Segovia

La oralidad es relevante al momento del alegato de apertura, desarrollo del juicio oral y alegato final, ya que en este espacio de tiempo el juez evalúa la información recepcionada para posteriormente elaborar su propia teoría. El Juez, el Ministerio Publico y la Defensa están de acuerdo que conocen y utilizan en este Juzgado las técnicas de la litigación oral, pero que los litigantes no estudian la aplicación de las técnicas antes de presentarse a audiencias y juicios. Esto nos lleva a concluir que en este juzgado no hay una efectiva aplicación de las técnicas de litigación oral.

El judicial nos señaló que según el planteamiento de la teoría del caso en el alegato de apertura de cada parte litigante, hay limitantes en algunos casos, puesto que el Ministerio Público procede a leer el relato de los hechos cuando debería plantearse de acuerdo a sus pretensiones de manera suscita lo que se pretende en el juicio, esto afecta la defensa de la víctima.

Las partes procesales elaboran su teoría del caso, incluyendo la parte de la humanización del sujeto del proceso, sobre todo el Ministerio Público sin embargo la defensa elabora teorías del caso que ocasionalmente afectan la integridad y la moral de la víctima.

Respecto al uso de la técnica de litigación oral de las objeciones, se conoce que en el desarrollo del juicio no las ponen en práctica, ya que no hacen mucho uso de ellas no se aplican según el procedimiento y no se fundamentan, en tiempo, porque incluso, objetan cuando el testigo ya ha contestado las preguntas hechas por las partes.

Sobre la aplicación de losinterrogatorios y contra interrogatorios a testigos y peritos, el Juez nos señaló que no siempre van dirigidos a demostrar la teoría del caso, muchas veces se van por dejar entre ver otras situaciones, esto se da más por parte de la defensa porque el Ministerio Publico si aplica la objetividad, hacen sus preguntas según la teoría del caso en cambio la defensa en su afán de lograr un fallo de no culpabilidad busca como desviar el tema y dejar entre ver otras situaciones que no vienen al caso; en esto el judicial debe de tener sutileza y empoderamiento de su cargo para guiar sin que eso signifique cortar su derecho a la defensa o al Ministerio Público de hacer sus preguntas que estime convenientes, encausado las interrogantes al caso .

En el alegato final, el juez, Fiscal y defensa coinciden en afirmar que si se hace uso de las técnicas de litigación oral porque ya ha pasado todo el desarrollo del juicio oral, ya están claros de lo que pasó. La judicial hace del conocimiento a las partes de hacer alusión de lo que paso en juicio únicamente, no permite que pase mucho tiempo, lo que importa es lo que realmente paso en juicio, las partes ya llegaron aterrizados a su teoría del caso y a lo que realmente paso.

Siendo una exigencia del Modelo de Atención Integral la sensibilización ante la víctima, es mínima por parte de la defensa, sin embargo el Ministerio Público como representante de la víctima enfatiza esta práctica en la mayoría de procesos, siempre y cuando tenga contacto con la víctima. Lo que hay que resaltar aquí es que el Ministerio Público cuida la no revictimización de la víctima.

La víctima únicamente recibe una atención Médico Legal para evaluar su estado físico y psicológico durante el proceso judicial, nos referimos a la evaluación de Medicina Forense pero al presentarse la víctima a audiencias y al juicio lo hace con un familiar o sola, una vez finalizado no experimenta seguimiento por parte de las instituciones involucradas en el Modelo de Atención Integral. Es notable que el Modelo de Atención no funciona porque no le brinda seguridad y protección a la víctima.

Las respuestas brindadas por una víctima que solicitó estar en el anonimato, demostraron que en este juzgado existen casos de violencia de género donde la víctima no tiene un acompañamiento institucional especializado integral durante, ni después del proceso; es voluntaria la participación de la misma en audiencias y juicios ya que la víctima se considera representada sólo en el proceso judicial una vez elaborada la acusación, pero un acompañamiento institucional especializado e integral (psicóloga, trabajadora social y asesor legal) no lo tiene, siendo esta una debilidad del Modelo de Atención ya que la víctima presentada ante el juez sin una atención psicológica y sin la asesoría adecuada podría perfectamente retractarse en los hechos acusados y esto influir en un fallo de No culpabilidad.

De acuerdo a la información brindada por la Judicial conocimos que un porcentaje minoritario de víctimas han recibido acompañamiento durante el proceso y posterior o finalizado el proceso judicial no existe acompañamiento ni seguimiento a la atención que garantice un desarrollo integral. La víctima entrevistada refirió que durante el proceso fue atendida por psicólogo y posterior no ha recibido ninguna atención. O sea no he hablado con nadie desde que concluyo el juicio. La víctima no experimenta seguimiento después de finalizado el proceso, el Modelo de Atención Integra; no lo contempla, y además ya que existen victimas que su domicilio es muy lejano a las casas de apoyo y se dificulta el seguimiento.

La Judicial sobre este tema nos aportó que: a la víctima no se le sigue dando atención especializada, ha sido critica de esto ya que se han dado casos en que el acusado se le da sentencia por tantos años, se han dado caso como el de una niña que se llevó al proceso, se sentenció al acusado y a los días o meses la niña andaba en la calle y descuidada por sus padres y caminaba en lugares solos expuesta a ser abusada y desde ahí se ve que hay descuido, habían tres procesos de la niña y de diferente hombres esto hace capturar a dichos hombres ya que la niña está expuesta por inocencia o necesidad.

Llamó la atención al grupo investigativo la respuesta de la defensa referente al seguimiento institucional a las víctimas de violencia de género, ya que está clara que no hay institución que vele por la víctima después del proceso, sin embargo señala, que sería necesario que se le dé empoderamiento a la mujer y que tenga otras opciones para poder dar un giro a su vida y no volver a caer en el mismo circulo de violencia.

Logramos conocer también que existe falta de garantía del cumplimiento de las medidas cautelares para protección de la víctima, lo que genera soledad, inseguridad e insatisfacción una vez finalizado el proceso. La víctima entrevistada nos confirmó su insatisfacción al señalar: Que el juicio no le ayudó en nada. Más bien con estas debilidades del sistema, queda más desprotegida la víctima ante cualquier acto de violencia que decida hacer el agresor.

El MAI (MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL) considera como puerta de entrada a la Ruta de Atención a la víctima de violencia, a las Comisarías de la Mujer y la Niñez. Es conocido que las mujeres víctimas de violencia concurren a las Comisarías de manera directa, por referencia del Ministerio Público, otras instituciones gubernamentales y los Centros Alternativos de Atención. Verificamos que en el Juzgado de Distrito de Violencia de Género en el Departamento de Nueva Segovia no hay implementación del MAI (MODELO DE ATENCIÓN INTERAL) en la práctica, además no hay atención integral brindada desde cada oficina de las instancias que lo integran, la característica de centros integrados que tiene la particularidad que el personal técnico de las tres instancias involucradas en los procesos de investigación, acusación y representación de las víctimas (Comisaría de la Mujer y la Niñez, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público) brindan la atención corre-spondiente, ubicados físicamente en un mismo edificio.

# RECOMENDACIONES.

Promover la prevención como estrategia e intervención en el Modelo de Atención Integral (MAI), para sensibilizar a los entes a partir de la acción penal, evitando la re victimización e irrespeto hacia las mujeres víctimas de violencia de género.

Tomar en cuenta la evaluación para implementar estrategias que únicamente están plasmados en documentos y no son puestos en práctica actualmente.

Procurar la inserción y activación de instituciones responsables que cumplan su papel dentro del modelo de atención integral a la victima

Cerciorarse de que las medidas de protección de emergencia y cautelares garanticen la protección a la víctima tanto física, emocional o laboral.

Que se haga efectivo el acompañamiento y dar continuidad al Modelo de atención integral procurando el seguimiento a las víctimas de violencia de género una vez finalizado el proceso.

Insertar como nueva estrategia la creación de oficina de acompañamiento a la víctima durante el proceso judicial así como atención psicológica gratuita.

Que el estado destine recursos económicos para el cumplimiento efectivo del Modelo de Atención Integral (MAI) en pro de la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la ampliación de cobertura favoreciendo a víctimas de zonas rurales favoreciendo su desarrollo, tomando en cuenta que en el departamento de Nueva Segovia no existe un centro de protección especial y publico a víctimas de violencia que pueden ser atendidas con respeto y dignidad.

Incluir en el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las sentencias, con el fin de brindar la protección hacia las mujeres víctimas de violencia beneficiando su desarrollo, tranquilidad y bienestar.

Garantizar la reinserción de la víctima a la sociedad, procurando atención integral mediante la integración en escuelas de oficio, cursos libres, emprendedurismo y fuentes de empleo.

En cuanto las técnicas de litigación oral:

Que los judiciales exijan de acuerdo a mandato de ley el debido cumplimiento de las técnicas de litigación oral en los juicios.

Capacitar a abogados en cuanto a la importancia y ejecución de las técnicas de litigación para realizar un eficaz cumplimiento del debido proceso.

Concientizar a abogados que ejercen como defensa sobre la parte de sensibilización hacia las víctimas y la elaboración de una correcta teoría del caso sin animo a afectar la moral de la víctima así como que esta reciba un trato con la debida diligencia y trato meritorio.

Enfatizar en estudiantes de derecho desde sus primeros años de estudio la aplicación de las técnicas de litigación oral para crear una disciplina de práctica.

# ANEXOS

## Anexo 1 Resumen de Encuesta a Juez / Defensor / Ministerio Publico

1. **¿Conoce las técnicas de litigación oral?**

**Juez:** Si conoce las técnicas de litigación debido a los años de experiencia.

**Ministerio Público**: Si, las técnicas de litigación son las estrategias que usan las partes en un proceso.

**Defensa:** Si, conozco como todo profesional en derecho

1. ¿**En el desarrollo de juicios orales las partes aplican estas técnicas?**

**Juez:** La mayor parte de los abogados activos en la materia de violencia y ministerio público, aplican las técnicas de litigación oral, haciendo la observación que donde hay falta es en las objeciones ya que no hacen mucho uso, de ellas no se aplican según el procedimiento y no se fundamentan, en tiempo y el testigo ya ha contestado las preguntas hechas por las partes.

**Ministerio Público:** En juicio, en la publicidad, el trato a las víctimas, son estrategias para no re victimizar.

**Defensa:** Muchas veces no se ponen en práctica en juicios ni audiencias por parte de los litigantes, porque estas deberían de ponerse en práctica continuamente y a las partes se les olvida repasar antes lo que contempla la ley en cuanto a las técnicas de litigación oral.

1. **¿Ha observado si las partes del proceso en el alegato de apertura plantean la teoría del caso haciendo uso de las técnicas de litigación oral?**

**Juez:** Según el planteamiento de la teoría del caso en el alegato de apertura hay limitantes en algunos casos, puesto que el Ministerio Público procede a leer el relato de los hechos cuando debería plantearse de acuerdo a sus pretensiones de manera suscita lo que se pretende en el juicio.

**Ministerio Público**: si para demostrar la teoría preposición fácticas, los abogados se salen de la teoría para demostrar situación que no tienen que ver. Hacen uso de la técnica del alegato final, como utilizamos la entrevista para los testimonios, si se demostraron con los peritos, la oralidad, uso de convenciones y tratados internacionales. El alegato final, las pruebas y hechos probados

**Defensa:** El alegato de apertura es corto y escueto y es en el que más profundiza el Ministerio Público ya que a estos le corresponde la carga probatoria y demostrar la culpabilidad, la defensa en este caso se limita a refutar al ministerio público y a mostrar pruebas de inocencia porque esto ya está contenido en la ley como presunción de inocencia.

1. **Humanizan las partes a su representado?**

**Juez:** En caso de la humanización, el Ministerio Público y los defensores hacen su esfuerzo de humanizar y tratan de dirigirse a esa persona con el debido respeto no tratándolos como un simple objeto.

**Ministerio Público:** Si humanizan en que aspecto, nosotros tratamos de utilizar medios para no re victimizar, usar medios para no reprochar no revivir el momento vivido, explicar cuáles son sus derechos se remiten a un tratamiento sicológico para tratar que las victimas superen, para resarcimiento.

**Defensa:** Hay que humanizar ya que hay que resaltar esta parte en tu representado para que el juez cree ese humanismo desde su percepción y vea a mi defendido como inocente y es el momento preciso de practicarlo en los alegatos de apertura

1. **Durante el desarrollo del juicio Oral y público, las partes demuestran sensibilización en cuanto a la violencia de genero.**

**Juez:** El Ministerio Público muestra sensibilización conforme a la violencia de género, algunas defensas no perciben que tratan a la víctima como falsa haciendo ver que la víctima hace todo por celosa, quedarse con la vivienda, son argumentos que plantean en el alegato de apertura

**Ministerio Público:** las partes no siempre muestran sensibilización, a veces los jueces exigen detalles irrelevantes, no estamos totalmente hacia la violencia a veces los defensores hacen preguntas en contra del honor de la víctima.

**Defensa:** Algunas partes muestran sensibilización esto de género es muy delicado porque se trata de violencia a la mujer o al hombre ya que existe abuso de ambas partes, esa llamadera y el control es abuso eso es violencia, y aquí hay muchos hombres también violentados que no lo dicen.

1. **¿Las víctimas de violencia de género comparecen al juicio a brindar su declaración?**

**Juez:** Las victimas comparecen al juicio a rendir su declaración en un noventa por ciento de los casos, cuando va a declarar la víctima se hace uso de la mampara para protegerla de la re victimización.

**Ministerio Público** si comparecen, a veces no siempre en el cien por ciento por el ciclo de la violencia porque son acosadas, se pide que asistan a todas las audiencia a las primera no es obligatoria en la audiencia preliminar e inicial las representamos nosotros

**Defensa:** Si algunas comparecen las víctimas y las que lo hacen,lo hacen con mampara para evitar contacto con el acusado

1. **¿Las víctimas de violencia de género acuden solas a los juicios orales o tiene alguien que las acompañe?**

**Juez:** en un noventa por ciento comparecen solas van acompañadas por psicólogos y cuando son menores de edad acompañados por su tutor.

**Ministerio Público:** Cuando son menores tienen que ser representados y sin son mayores pueden ir solar o acompañadas ante el Ministerio Público a victima menores de edad pero no siempre.

**Defensa:** Algunas de ellas llegan al juicio y llegan solas o acompañados por un familiar

1. **¿Los interrogatorios o contra interrogatorios que realizan las partes van dirigidos a demostrar su teoría del caso?**

**Juez:** Los interrogatorios y contra interrogatorios, no siempre van dirigidos a demostrar la teoría del caso, muchas veces se van por dejar entre ver otras situaciones, esto se da más por parte de la defensa porque el ministerio publico si aplica la objetividad ,hacen sus preguntas según la teoría del caso en cambio la defensa en su afán de lograr un fallo de no culpabilidad busca como desviar el tema y dejar entre ver otras situaciones que no vienen al caso; en esto el judicial debe de tener sutileza y empoderamiento de su cargo para guiar sin que eso signifique cortar su derecho a la defensa o al Ministerio Público de hacer sus preguntas que estime convenientes, encausado las interrogantes al caso .

**Ministerio Público:** el contrainterrogatorio, se da en un proceso, se aplican principalmente en la declaración de los testigos, para que ellos cuenten que es lo que paso, es una técnica para los peritos, la prueba documental.

**Defensa:** En el interrogatorio y contra interrogatorio, uno hace su proyecto de defensa con la teoría del caso a como se plantea así van las preguntas, las repreguntas no pero el examen debe de robustecer la teoría del caso.

1. **¿Hacen uso de las técnicas de litigación oral en el alegato final?**

**Juez:** En el alegato final se hace uso de las técnicas de litigación oral porque ya ha pasado todo el proceso y ya están claros de lo que pasó. la judicial hace de conocimiento a las partes de hacer alusión de lo que paso en juicio únicamente, no permite que pase mucho tiempo de hechos que hubiesen pasado, lo que importa es lo que realmente paso en juicio, las partes ya llegaron aterrizados a su teoría del caso y a lo que realmente paso.

**Ministerio Público:** Se hace uso de las técnicas de litigación, se hace ver si la declaración del testigo fue concordante, si coincide con los hechos narrados, si se acreditaron los peritos, si se demostraron los hechos con las pruebas periciales, uso de la oralidad.

**Defensa:** En el alegato final se hace uso de estas técnicas se debe de saber objetar, saber repreguntar no se puede poner en la boca del testigo palabras que este no ha dicho

1. **Como fiscal del caso, luego que finalice un juicio oral, vuelve a tener contacto con la victima?**

Si claro contacto para darle seguimiento o avance, vienen por ayuda de médico, seguimiento sicológico, cómo va el caso en ejecución de sentencia no es siempre que vienen todas las mayoría vienen

1. **¿Cómo judicial que conoce y resuelve el caso una vez que finaliza el juicio vuelve tener contacto con las víctimas de violencia de género. Existe alguna norma que remita a las victimas alguna institución que le brinde atención y protección integral?**

Como judicial no es mí función brindar seguimiento a la víctima, para eso están otras instancia.

**Ministerio Público:**

1. **¿Sabe si reciben las víctimas de violencia de género una atención especializada?**

**Judicial**: A la víctima no se le sigue dando atención especializada, ha sido critica de esto ya que se han dado casos en que le acusado se le da sentencia por tantos años, se han dado caso como el de una niña que se llevó al proceso, se sentenció al acusado y a los días o meses la niña andaba en la calle y descuidada por sus padres y caminaba en lugares solos expuesta a ser abusada y desde ahí se ve que hay descuido, habían tres procesos de la niña y de diferente hombres esto hace capturar a dichos hombres ya que la niña está expuesta por inocencia o necesidad .

**Defensa :**No hay institución que vele por la victima después del proceso, sería necesario que se le dé empoderamiento a la mujer y que tenga otras opciones para poder dar un giro a su vida y no volver a caer en el mismo circulo de violencia.

**Ministerio Público** Si, las atiende la policía, luego las entrevista única, van a medicina legal, forense, al sicólogo, si hay daño se remite al centro o al hospital la etapa no termina en el juicio, esta la etapa de ejecución de sentencia y la de apelación, con la entrevista única cuando no son violencia sexual.

1. **¿Actualmente se hace uso de una ruta de atención a víctimas de violencia de género?**

**Juez:** La ruta de atención no funciona como antes solo está el modelo pero no en función

**Ministerio Público:**

El MAI entrevista única para que no vuelvan a repetir, los médicos y sicólogos tienen modelos para entrevistar a la víctima cuando sea necesario, es decir ellos hacen preguntas que no fueron hechas y que son necesarias, luego se remiten al Ministerio Publico con Auxilio Judicial. El Modelo está en práctica aunque no hay comisarías.

**Defensa:** La ruta de MAI solo está en papel, ya que la víctima llegan tal vez con un familiar o solas o no llegan, así que la práctica es diferente, otro punto que solo está en papel es la declaración única para no re victimizar, eso es mentira, muy mentira se inicia con la joven que toma la denuncia en la policía, luego donde el psicólogo, única debería de ser única .

1. **¿Sabe usted cómo se inicia un proceso en un caso de violencia de género?**

**Juez:** El proceso se inicia con la denuncia en auxilio judicial por parte de la víctima o de oficio solo en casos de menores de edad

**Ministerio Público:** Inicia con la audiencia preliminar ya que con la investigación y esta empieza con la denuncia, se cuenta tiempo para delitos graves y menos graves, una vez que termina si tiene coordinación con Casa entre Nosotras, se apoyan de otros organismos porque el Ministerio Publico no tiene, todas las víctimas se remiten allí.

**Defensa**: El proceso en violencia de género es normal parecido al proceso penal común con la única diferencia que se le da un trato especial a la víctima porque existe una declaración única, protección, medidas precautelares y en el sentido de por ejemplo alejar del agresor a la víctima ,se hace .a través de la policía por lo que yo veo muy negativo la desaparición de la Comisaria de la Mujer ya que se luchó por crear una costumbre de cuido especial a la víctima y pienso que la violencia existe más de lo que nosotros nos imaginamos, antes lo de género estaba en el juzgado de distrito de audiencia y estaba recargado el trabajo de la judicial.

1. **Una vez que termina el proceso judicial las víctimas de violencia de género son atendidas por alguna institución en especial para seguimiento a su afectación psicológica**

**Juez**: El juez nos respondió que este tema ha sido muy criticado ya que No hay institución que vele por la victima después del proceso, sería necesario que se le dé empoderamiento a la mujer y que tenga otras opciones para poder dar un giro a su vida y no volver a caer en el mismo circulo de violencia.

**Ministerio Público:** El ministerio público tiene coordinación con Casa entre Nosotras, todas las víctimas se remiten allí para atención psicológica.

**Defensa:** No se le brinda atención a la víctima cuando finaliza el proceso. Los jueces mandan a asistir a la víctima pero después al final lo dejan opcional

## Anexo 2 Resumen de Encuesta a víctima de violencia

**Caso: Víctima de violencia**

**Entrevista a víctima de violencia**

**¿Cómo víctima, compareció usted al juicio a brindar declaración?**

Expresa la victima que al juicio llego sola, nadie de las autoridades la acompaño .Dijeron que si querían ir que fueran y sino también, era opcional o decisión de ella (ella fue acompañada de la nuera)

**¿Posterior al juicio sigue recibiendo atención especializada?**

Durante el proceso fui atendida por psicólogo y posterior no he recibido ninguna atención. O sea no he hablado con nadie desde que concluyo el juicio.

**¿Cómo han sido sus entrevistas a partir de la denuncia?**

Cuando fuimos con mi nuera a poner la denuncia me entrevisto un policía y luego me mandaron al psicólogo forense, me hicieron otro tipo de preguntas, referida a la familia, el entorno en que ha vivido, si había recibido maltrato por la familia etc.

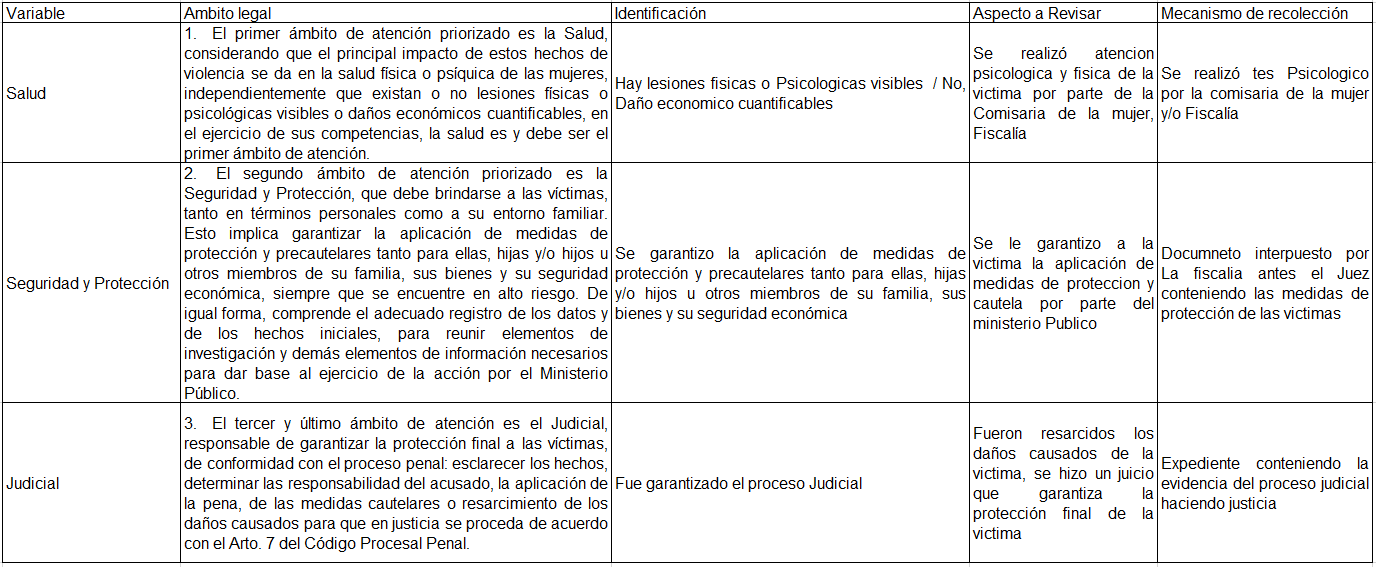
**¿Desde la apertura del proceso se le mantuvo informada de los avances del proceso?**

Si, a mí me avisaban cuando había audiencia y también me decían que le aplicaron medidas cautelares pero a mí me saco de la casa desde que lo denuncie y se quedó con la casa yo estoy actualmente posando hace años porque él me amenaza que no me quiere ver cerca de la casa ni a mí ni a mis hijos, también me dijeron que entre las medidas que le pusieron estaba la cita a un psicólogo pero como solo lo dicen ahí y queda en papel ese señor no cumplió nada.

**¿Una vez finalizado el juicio, se siente usted satisfecha de los resultados del Proceso Judicial?**

Siento que esto no ha terminado, ese hombre me amenaza todavía, yo no puedo salir sola me da miedo, mis hijos me acompañan cada vez que quiero ir a comprar algo, en la finca que mis hijos trabajan tienen que andar juntos porque ha dicho que los va a matar y va a matarse él, ya lo intento una vez sino me salva mi cuñado no estuviera aquí, así que le digo la verdad me siento sola y desprotegida todavía. Los mismos policías dicen que ese señor está loco. A mi criterio no sirvió de nada el juicio porque él salió y me sigue violentando

## Anexo 3 Operacionalización de las Variables.



# Bibliografía

Asamblea, N. (2014). *Código Procesal Penal de Nicaragua.* Managua: SENICSA.

Asamblea, N. (2014). *Constitución Política de Nicaragua.* Managua: SENICSA.

Asamblea, N. (2014). *Ley 779, Ley Integral Contra la violencia hacia la mujer y sus reformas.* Managua: La gaceta.

Asamblea, N. (2015). *Codigo Penal de la Republica de Nicaragua.* Managua: SENICSA.

Baytelman Aronowky Andres, D. J. (2004). *Litigación Penal. Juicio Oral y Prueba.* Santiago de chile: Imprenta saleciano SA.

Justicia, C. S. (2012). *Manuel educativo posgrado de sensibilizacion y especializacion en violencia de genero.* Corte suprema de Justcia. Managua Nicaragua: Escuela judicial.

Somarriba, M. (2016). Ruta de atención. *Ruta de atención,* 12.

Unidas, F. d. (2012). *Modelo de Atención a víctimas de violencia.* Managua: ISBN.

Protocolo de Interpretación de la Ley de prevención y atención en violencia de género en Nicaragua tomado de <https://www.poderjudicial.gob.ni/genero/pdf/publicaciones_recursos_int/PROTOCOLO_PREVENCION_VIOLENCIA_PJ.pdf>.

LEY No . 779, “LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No . 641, “CÓDIGO PENAL <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/nic138659.pdf>

Belén do Pará, Convención Internacional Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pág. 1, 2015. <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/folleto-belemdopara-es-web.pdf>

Ley 799, Art. 7. Políticas públicas de protección integral hacia la víctima de violencia, cita realizada del sitio web <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/8f45bac34395458c> 062578320075bde4/FILE/Ley%20No.%20779%20Ley%20Integral%20contra%20la%20Violencia.pdf

Ley No. 779 2/41 LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No. 641, “CÓDIGO PENAL, citada del sitio web: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/0/8f45bac34395458c062578320075bde4/$FILE/Ley%20No.%20779%20Ley%20Integral%20contra%20la%20Violencia.pdf>.

Constitución política de Nicaragua, <https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf>

NUDH, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>, para referencia se usara solo NUDH C – 1981, Arto

Bustelo García, 1990; p. 209-225, tomado de la pagina https://www.undocs.org/pdf?symbol=es/A/48/38(SUPP)

Amorós, C. (2007). Teoría Feminista: de la Ilustración a la globalización. Tomo I. Minerva Ediciones. Arbor (nov – dic, 1987). Espacio de los iguales espacio de las idénticas. Notas sobre el poder y principio de individualición.

Arroyo, R (2008). “Construcción Constitucional enfoque de género”, Revista Pensamiento Jurídico Feminista. Vol. 4

Carcedo.Ana. No aceptamos ni olvidamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006.San Jose Costa Rica, Editorial Cefemina, 2010

Cebada, A (2002). Los conceptos de obligación Erga Omnes, IusCogens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CID sobre responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos. Revista Electrónica de Estudios Internacionales.

CEM-MUJER\_IEM. Aplicabilidad de la normativa sobre violencia contra la mujer en Centroamérica- Heredia, C.R.: Universidad Nacional.

Charlesworth, H (2004) ¿Qué son los Derechos Humanos de las Mujeres? Manual de Derecho Internacional. ILANUD.

Cobo Bedia, R (1995): 10 palabras clave sobre la mujer, Género. Madrid: Editorial Verbo Divino.

Comisión de Derechos Humanos 62º período de sesiones tema 12 a) del programa provisional. La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer. Informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias,

YakinErtürk.e/cn.4/2006/6120 de enero de 2006 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica.

OEA/Ser.L/V/II.Doc.63.9 diciembre 2011 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación Genere al No28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 16 de diciembre 2010.

Cook, R (1997): "La responsabilidad del Estado según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", Bogotá, Colombia: Derechos Humanos de la Mujer, perspectivas Nacionales e Internacionales, PROFAMILIA. Corte IDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (17 de septiembre, 2003). Opinión Consultiva OC-18/03. Solicita por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y derechos de los migrantes indocumentado.

Facio, A (1999). Género y Derecho, Editorial Colección Contraseña, estudios de Género, Serie Casandra. San José, Costa Rica: Naciones Unidas, ILANUD, UNIFEM, Editorial Diseño Alternativo.

Facio, A (2008). “Derecho de Igualdad en la ley. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres”. IIDH: Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, C.R: IIDH.

Fernández, A (1990). Garantía Internacional de Los Derechos Sociales. Contribución de Naciones Unidas al progreso y desarrollo social, los derechos del niño, la eliminación de la discriminación de la mujer y desarrollo del voluntariado. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

Jiménez, R (2012). Diagnóstico de la situación actual del Programa de Convivencia Familiar. San José, Costa Rica.

Kelly, Liz (1988), Surviving sexual violence. PolityPress, Inglaterra.

OEA, CIDH (2008). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas Audiencia temática, Barreras para el acceso a la justicia en América Latina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC.

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68 20 enero 2007 Original: Español Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en Las América.

Ruiz, M (1994). “Discriminación inversa e igualdad”, en: El concepto de igualdad, Ed. P. Iglesias.

Russell, D; Radford, J (1994).Femicide.The politics of woman killing.

Sevilla, J; Arroyo, R; Esquembre, M; Montaña, J (2011). Comentarios al proyecto de ley de igualdad entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo – genérica. Quito, Ecuador: Comisión de transición hacia el consejo de las mujeres y la igualdad de género.

Aguilar, M. (2005). Manual sobre Aplicación del Principio de Oportunidad en el CPP. Managua: Litografía y Tipografía Rojas & Cia.Ltda.

Houed Vega, M. (2007). De la suspensión del Proceso a Prueba o de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal. Managua: Servicios Gráficos.

Violencia estructural de género: una categoría necesaria de análisis para los derechos humanos de las mujeres. Revista Pensamiento Jurídico Feminista. No.1. 2004

<http://165.98.12.83/388/1/UCANI3166.PDF>

<http://www.aecid.org.ni/portfolio/proyecto-de-atencion-integral-a-victimas-de-violencia-de-genero/#:~:text=En%20Nicaragua%2C%20la%20violecia%20intrafamiliar,resarcir%20el%20da%C3%B1o%20de%20la>

<https://oig.cepal.org/sites/default/files/nicaragua_2006_2010_pneg.pdf>, pag 27

<https://www.poderjudicial.gob.ni/genero/pdf/Politica_de_Genero_de_la_CSJ.pdf>

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Round2-FollowUp-ShadowReport-Nicaragua.pdf

1. Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia la mujer y sus reformas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Modelo de atención integral a víctimas de género en Nicaragua. [↑](#footnote-ref-2)